

PRONUNCIAMIENTO N° 595-2024/OSCE-DGR

Entidad : Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte

Referencia : Concurso Público N° 10-2024-DIRIS LN-1, convocado para la contratación del “Servicio de seguridad y vigilancia para los establecimientos de salud y sede administrativa de la DIRIS Lima Norte”

1. ANTECEDENTES

Mediante el formulario de solicitud de emisión de pronunciamiento recibido el 3 de octubre de 2024¹ y subsanado con fecha 15 de octubre de 2024², el presidente del comité de selección a cargo del procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las solicitudes de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones presentadas por los participantes **INVERSIONES GUEVARA S.A.C., OPTIMUS SECURITY S.A.C. y DEFION SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A.C.**, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la “Ley”, y el artículo 72 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el “Reglamento”.

Asimismo, cabe indicar que en la emisión del presente pronunciamiento se empleó la información remitida por la Entidad, con fecha 15³ y 24⁴ de octubre de 2024, mediante la Mesa de Partes de este Organismo Técnico Especializado, la cual tiene carácter de declaración jurada.

Ahora bien, cabe precisar que en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el orden establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio⁵ y los temas materia de cuestionamientos de los mencionados participantes, conforme al siguiente detalle:

- **Cuestionamiento N° 1** : Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 9, referida a la “**Licencia de uso de armas**”
- **Cuestionamiento N° 2** : Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 11, referida a la “**Licencia de**

¹ Mediante el Expediente N° 2024-0134069.

² Mediante el Expediente N° 2024-0139744.

³ Mediante el Expediente N° 2024-0139744.

⁴ Mediante el Expediente N° 2024-0145772.

⁵ Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego absolutorio en versión PDF.

conducir”

- **Cuestionamiento N° 3** : Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 12, N° 17, N° 44 y N° 81, referidas a la **“Formación académica”**
- **Cuestionamiento N° 4** : Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 15, referida a los **“Factores de evaluación”**
- **Cuestionamiento N° 5** : Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 39, referida a la **“Acreditación de licencia de funcionamiento municipal”**
- **Cuestionamiento N° 6** : Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 41, referida a la **“Edad del personal”**
- **Cuestionamiento N° 7** : Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 46, N° 82 y N° 279, referidas a las **“Capacitaciones del personal”**
- **Cuestionamiento N° 8** : Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 70, N° 134, N° 136 y N° 201, referidas a los **“Equipos de comunicación”**
- **Cuestionamiento N° 9** : Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 86, N° 87, N° 192 y N° 208, referidas a las **“Otras penalidades”**
- **Cuestionamiento N° 10** : Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 114, referida al **“Curso de Formación Básica y/o perfeccionamiento”**
- **Cuestionamiento N° 11** : Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 200, referida **“Habilitación del postor”**

Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión de la solicitud de elevación del participante **INVERSIONES GUEVARA S.A.C.**, se aprecia que al cuestionar la consulta y/u observación N° 12, solicita que únicamente se requiera secundaria completa para el

“Coordinador externo”; sin embargo, en la referida consulta y/u observación se solicitó que se precisen las carreras profesionales a las que se refiere la Entidad con el término “*estudios técnicos superiores*”.

Por tanto, considerando que la pretensión del referido extremo del cuestionamiento excede los alcances de la consulta y/u observación en cuestión, se advierte que la pretensión deviene en extemporánea; **por lo que este Organismo Técnico Especializado no se pronunciará respecto de dicho extremo de la solicitud de elevación.**

2. CUESTIONAMIENTOS

De manera previa, cabe señalar que el OSCE no ostenta la calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de determinados aspectos del requerimiento (especificaciones técnicas, términos de referencia y expediente técnico de obra, según corresponda); sin embargo, puede requerir a la Entidad informes que contengan la posición técnica al respecto⁶, considerando que el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

Cuestionamiento N° 1

Respecto a la “*Licencia de uso de armas*”

El participante **DEFION SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A.C.** cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 9, alegando que la Entidad estaría exigiendo que la licencia para el uso de arma de fuego se encuentre vigente y a nombre del postor, lo cual resulta imposible de cumplir, considerando que la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada señalan que las licencias de armas en la modalidad L4 no son sujetas a endosos a nombre de la empresa. Por lo tanto, **la pretensión del recurrente está orientada a que no se requiera que las licencias de uso de armas de fuego se encuentren a nombre del postor.**

Pronunciamiento

De la revisión del numeral 2.3 del Capítulo II y el acápite 5.4.2 del numeral 3.1 del Capítulo III, ambos de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

Capítulo II

(...)

2.3 Requisitos para perfeccionar el contrato

(...)

n) Copia del carnet de identidad vigente emitido por SUCAMEC.

⁶ Ver el Comunicado N° 011-2013-OSCE/PRE.

o) Copia de la licencia de uso de arma de fuego vigente emitida por SUCAMEC, de ser el caso.

Capítulo III

3.1 Términos de Referencia

(...)

5.4.2 Armamento

4) Para el caso de los agentes de vigilancia con armamento, el contratista deberá presentar para la firma del contrato, no menos del 30% del personal armado solicitado, dando un plazo de 30 días hábiles para la regularización de la documentación total del personal requerido.

Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 9, se solicitó que se otorgue un plazo razonable para la tramitación del Carnet de SUCAMEC y la Licencia de armas; ante lo cual, la Entidad decidió acoger parcialmente lo solicitado, señalando que se deberá presentar no menos del 30% del personal propuesto como personal armado que cuente con carnet SUCAMEC y licencia para el uso de armas de fuego vigentes a nombre del postor, debiendo regularizar la documentación total en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, establecen que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento (los términos de referencia en caso de servicios), debiendo éstos contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación.

En ese contexto, y teniendo en cuenta lo cuestionado por el recurrente, respecto a la absolución señalada en los párrafos precedentes, mediante Informe Técnico N° 022-2024-DIRIS-LN/3⁷, la Entidad indicó lo siguiente:

“Al respecto se suprime tal condición, y se incluye o) “...personal propuesto como personal armado que cuente con carnet SUCAMEC vigente, tarjeta de propiedad a nombre del postor y licencia para el uso de armas de fuego vigente...”.

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que mediante el Informe Técnico posterior, la Entidad decidió suprimir la condición de que la licencia para el uso de armas de fuego vigente se encuentre a nombre del postor.

⁷ Mediante el Expediente N° 2024-0134069, de fecha 3 de octubre de 2024.

En ese sentido, considerando el análisis de los párrafos precedentes y dado que la pretensión del recurrente está orientada a que se confirme que no se requerirá que las licencias para el uso de armas de fuego vigentes estén a nombre del contratista, y en tanto que mediante informe técnico, la Entidad ha admitido suprimir el extremo cuestionado; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **ACOGER** el presente cuestionamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que la Entidad, mediante la absolución de la consulta y/u observación materia de cuestionamiento señaló que debía realizarse precisiones en el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, no obstante, de la revisión de estas últimas se aprecia que la Entidad no efectuó tal precisión; razón por la cual se emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- **Se adecuará** el acápite o) del numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme lo siguiente:

Capítulo II

(...)

2.3 Requisitos para perfeccionar el contrato

(...)

o) Copia de la licencia de uso de arma de fuego vigente emitida por SUCAMEC, de ser el caso. Se deberá presentar no menos del 30% del personal propuesto como personal armado que cuente con carnet SUCAMEC vigente, tarjeta de propiedad a nombre del postor y licencia para el uso de armas de fuego vigente, debiendo regularizar la documentación total en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** todo extremo de las Bases o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.
- Corresponde que el Titular de la Entidad **imparta directrices** correspondientes a fin que el comité de selección realice la integración de bases, de tal manera que se implementen de manera clara y precisa las modificaciones efectuadas a las Bases en virtud de la absolución de consultas y/u observaciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 72 del Reglamento.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y **el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos**, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 2

Respecto a la “Licencia de conducir”

El participante **OPTIMUS SECURITY S.A.C.** cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 11, alegando que la Entidad no ha brindado sustento técnico para requerir licencia de conducir AIIB al chofer, debido a que no habría considerado que dicha licencia es para uso de transporte público. Por tanto, **la pretensión del recurrente se encuentra orientada a que se requiera una licencia de conducir tipo AI, para uso particular.**

Pronunciamiento

De la revisión del acápite 5.5.1 del numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

5.5. EQUIPAMIENTO ADICIONAL PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO

5.5.1. UNIDAD MÓVIL

*El contratista deberá contar mínimo con un vehículo automotor en la sede administrativa de la DIRIS Lima Norte, con capacidad de cuatro (04) asientos en perfecto estado de conservación, que permita efectuar las supervisiones externas diarias del servicio, así como para la resolución de cualquier necesidad propia del servicio. Así mismo, deberá contar como mínimo con un conductor experimentado con **Licencia de conducir AII B**, quien estará a disposición exclusiva de la Unidad Funcional de Servicios Generales y Transporte, para los desplazamientos propios del servicio.*

Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 11, se solicitó que se suprima la licencia de conducir A1 requerida para los choferes; ante lo cual, la Entidad decidió no acoger lo solicitado, señalando que la licencia de conducir requerida se fundamenta en el tipo de actividad y en las características geográficas de la jurisdicción.

En ese contexto, y teniendo en cuenta lo cuestionado por el recurrente, respecto a la absolución señalada en los párrafos precedentes, mediante el Informe Técnico N° 023-2024-DIRIS-LN/3⁸, la Entidad indicó lo siguiente:

“Al respecto a la necesidad de requerir que los choferes cuenten con licencia de conducir AIIB y no licencia de conducir tipo A1, se precisa lo siguiente: De acuerdo al Artículo N°9 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir; las licencias de conducir se clasifican en:

- Licencia de conducir A1 (NO PROFESIONAL): Autoriza a conducir vehículos automotores de transporte de personas de las categorías M1 y*

⁸ Mediante el Expediente N° 2024-0139744, de fecha 15 de octubre de 2024.

M2 de uso particular, así como vehículos automotores de transporte de mercancías de la categoría N.

- *Licencia de conducir AIIB (PROFESIONAL): Autoriza a conducir vehículos automotores de transporte de personas de las categorías M2 y M3 de hasta 6 toneladas de peso bruto vehicular, destinados al servicio de transporte de personas bajo cualquier modalidad, así como vehículos de transporte de mercancías de la categoría N2. Siendo que uno de los requisitos básicos es tener al menos 3 años de antigüedad con licencia de conducir A1, o bien 1 año con la A2A, y 21 años como mínimo.*

La licencia específica requerida garantiza la experiencia necesaria para afrontar la situación geográfica y climática de la jurisdicción que abarca 9 distritos entre ellos Independencia, Comas, Carabayllo y Puente Piedra donde aproximadamente el 50% de los establecimientos en los cuales se requiere el servicio se encuentran en zonas de difícil acceso. Así mismo, son de alto índice delictuosa que requieren de un grado de atención y concentración que se garantiza con un conductor profesional”.

Al respecto, cabe señalar que, el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, establecen que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento (los términos de referencia en caso de servicios), debiendo éstos contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación.

Ahora bien, en atención del tenor de lo cuestionado, se aprecia que mediante el citado informe técnico, la Entidad decidió ratificar la licencia de conducir AIIB, señalando que dicha categoría de licencia de conducir garantiza la experiencia necesaria para realizar la actividad de transporte, considerando la situación geográfica y climática de los distritos que abarca el servicio; asimismo, agrega que la licencia de conducir AIIB es de tipo profesional.

Así, se desprende que la Entidad, siendo la responsable de la determinación de su requerimiento y, por ende, la mejor conocedora de sus necesidades, ha decidido ratificar que los choferes que realizan el transporte de la supervisión externa cuenten con licencia de conducir AIIB, bajo los argumentos expuestos en su informe técnico. Lo cual afirman en calidad de declaración jurada y está sujeto a rendición de cuentas.

Adicionalmente, cabe indicar que en el numeral 4.2 del “Formato de Resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias”, la Entidad declaró la existencia de pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir con el íntegro del requerimiento, lo cual incluyó el tipo de licencia de conducir requerido a los choferes.

En ese sentido, considerando el análisis de los párrafos precedentes y dado que la pretensión del recurrente está orientada a que necesariamente se acepte una licencia de conducir AI para los choferes, y en la medida que la Entidad mediante su informe ha ratificado la necesidad de requerir una licencia de conducir AIIB, señalando las

razones que sustentan su decisión; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **NO ACOGER** el presente cuestionamiento.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y **el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos**, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 3

Respecto a la “Formación académica”

El participante **INVERSIONES GUEVARA S.A.C.** cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 12 y N° 44, conforme a lo siguiente:

- **Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 12:**

Al respecto, el participante cuestiona que se requiera únicamente la “*carrera de administración o afines*” para el personal “Coordinador externo”, pues según refiere, ello vulnera el Principio de Libertad de Concurrencia y estaría favoreciendo a un determinado postor.

Por lo tanto, **la pretensión del recurrente está orientada a que se suprima la condición de que el “Coordinador externo” cuente con estudios superiores técnicos con título a nombre de la nación en administración o afines.**

- **Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 44:**

Al respecto, el participante cuestiona que se requiera únicamente la “*carrera de administración o afines*” para el personal “Supervisor”, pues según refiere ello vulnera el Principio de Libertad de Concurrencia y estaría favoreciendo a un determinado postor.

Por lo tanto, **la pretensión del recurrente está orientada a que se suprima la condición de que el “Supervisor” cuente con estudios superiores técnicos con título a nombre de la nación en administración o afines, y que únicamente se requiera secundaria completa.**

El participante **OPTIMUS SECURITY S.A.C.** cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 17 y N° 81, conforme a lo siguiente:

- **Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 17:**

Al respecto, el participante cuestiona que se requiera únicamente la “*carrera de administración o afines*” para el personal “Supervisor”, a pesar que existe personal con carreras profesionales diferentes que cuentan con la experiencia necesaria en el puesto de seguridad, lo cual constituye una condición restrictiva que vulnera el Principio de Libertad de Concurrencia.

Por lo tanto, **la pretensión del recurrente está orientada a que se suprima la condición de “administración o afines” requerida al “Supervisor”.**

- **Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 81:**

Al respecto, el participante cuestiona que la precisión relativa a que el *“personal en retiro de las Fuerzas Armadas y/o Policiales, se acreditará con la resolución de baja, mientras esta no sea por medida disciplinaria”*, no se incluyó en el literal j) del punto 12.1 Supervisor de seguridad del numeral 3.1 del Capítulo III de las Bases Integradas.

Por lo tanto, **la pretensión del recurrente está orientada a que se incluya la referida condición en el literal j) del punto 12.1 Supervisor de seguridad del numeral 3.1 del Capítulo III de las Bases Integradas.**

El participante **DEFION SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A.C.** cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 12, señalando que la Entidad ha incluido una *“partícula subjetiva”* que puede generar errores de interpretación en la evaluación y calificación de ofertas. Por lo tanto, **la pretensión del recurrente está orientada a que se precise a qué hace referencia la condición de “título a nombre de la nación en administración o afines” requerida para el personal “Coordinador externo”.**

Pronunciamiento

De la revisión del acápite 10 y 12 del numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

Capítulo III

3.1 Términos de Referencia

10. DE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN

a) SUPERVISIÓN EXTERNA:

*2. El contratista deberá dar cumplimiento a los procedimientos operativos de supervisión y control del servicio y así como designar un **Coordinador Externo** con capacidad resolutive, administrativa y operativa que asista a las reuniones de coordinación convocadas por la DIRIS Lima Norte para que se encargue de la dirección, planeamiento, ejecución y control de todas las actividades, compromisos y objetivos del servicio para la Entidad. Así mismo, será responsable de que el servicio sea cubierto en atención a las programaciones realizadas, llevando el control y las coordinaciones necesarias para que se cumpla la cobertura. El mismo que **debe contar con estudios superiores***

técnico profesional o universitario, debidamente capacitado con conocimientos y experiencia profesional en Seguridad Integral y Gestión de Riesgos y Desastres.

(...)

12. PERFIL DEL PERSONAL SOLICITADO

El personal de seguridad que preste servicios en la DIRIS Lima Norte, podrá ser personal civil, o personal en retiro de las Fuerzas Armadas y/o Policiales.

12.1.SUPERVISOR DE SEGURIDAD (Personal Clave)

j) Contar con grado técnico y/o universitario, se acreditará para la firma del contrato con copia grado a nombre de la nación.

Al respecto, a fin de atender los citados cuestionamientos al pliego absolutorio, y en atención a la afinidad entre los mismos, se procederá a efectuar su análisis a través de los siguientes **tres (3) extremos**:

a) Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 12:

Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 12, se solicitó, entre otros, que se aclare a qué se refiere la condición de “estudios técnicos superiores” y cuáles serán las carreras profesionales con las que deberá contar dicho personal; ante lo cual, la Entidad señaló que se requiere “*estudios técnicos superiores con título a nombre de la nación en Administración o afines*”.

En ese contexto, y teniendo en cuenta lo cuestionado por el recurrente, respecto a la absolución señalada en los párrafos precedentes, mediante el Informe Técnico N° 023-2024-DIRIS-LN/3⁹, la Entidad indicó lo siguiente:

(...) no resulta necesario precisar determinadas carreras profesionales, sobre el entendido que, el coordinador externo debe ser una persona con capacidad resolutive, administrativa y operativa que asista a las reuniones de coordinación convocadas por la DIRIS Lima Norte para que se encargue de la dirección, planeamiento, ejecución y control de todas las actividades, compromisos y objetivos del servicio para la Entidad. Así mismo, será responsable de que el servicio sea cubierto en atención a las programaciones realizadas, llevando el control y las coordinaciones necesarias para que se cumpla la cobertura; se precisa que una carrera profesional en específico no determina ni limita la capacidad para el desempeño de

⁹ Mediante el Expediente N° 2024-0139744, de fecha 15 de octubre de 2024.

<u>actividades determinadas.</u>

Al respecto, cabe señalar que el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento establecen que, en el caso de servicios, los términos de referencia que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el personal necesario para la ejecución de la prestación para lo cual se debe detallar su perfil mínimo y las actividades a desarrollar, así como clasificar al personal clave, esto es, aquél que resulta esencial para la ejecución de la prestación.

En tal sentido, corresponde señalar que la Entidad tiene potestad de incluir personal en el requerimiento, siempre que se detalle su perfil, entre lo cual se considera la formación académica, experiencia y capacitaciones, según corresponda, así como las funciones que desempeñará dentro de las actividades de la ejecución de la prestación; siendo que ello resulta necesario para la calificación que realiza el comité de selección, al momento de evaluar el personal propuesto por los oferentes, y para la determinación de los potenciales proveedores que cuentan con personal idóneo para la ejecución de la prestación.

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado, se aprecia que, mediante el citado informe técnico, la Entidad decidió dejar sin efecto la condición de que los “*estudios técnicos superiores*” requeridos para el “Coordinador externo” sean necesariamente en “*Administración o afines*”, pues de acuerdo a las actividades que realizará el referido personal, no resulta necesario que se precise una carrera profesional en específico, siendo que ello no limitará la capacidad del personal para el desarrollo de dichas actividades.

Así, se desprende que la Entidad, siendo la responsable de la determinación de su requerimiento y, por ende, la mejor conocedora de sus necesidades, ha considerado que la formación académica requerida para el “Coordinador externo” prevista en el requerimiento de las Bases de la convocatoria resulta suficiente para el desarrollo del servicio, lo cual resulta acorde al Principio de Libre Concurrencia.

En ese sentido, considerando el análisis de los párrafos precedentes y dado que la pretensión del recurrente es que se deje sin efecto las modificaciones realizadas a la formación académica requerida para el “Coordinador externo” con ocasión de la integración de las Bases; y en tanto que mediante informe técnico, la Entidad ha admitido el extremo solicitado, este Organismo Técnico Especializado ha decidido **ACOGER** el presente cuestionamiento; por lo que, se emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- **Se dejará sin efecto** la absolución de la consulta y/u observación N° 12.
- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** todo extremo de las Bases o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

b) Respecto de la absolución de las consultas y/u observaciones N° 17 y N° 44:

Al respecto, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente:

- Mediante la consulta y/u observación N° 17, se solicitó que se aclare a qué se refiere con “grado técnico” requerido al Supervisor; ante lo cual, la Entidad precisó que el grado es técnico superior con título y/o Bachiller universitario a nombre de la nación en Administración o afines, con experiencia mínima de un año.
- Mediante la consulta y/u observación N° 44, se solicitó que se modifique la formación académica requerida al Supervisor, considerando los requisitos mínimos previstos en el artículo 64 del Reglamento de la Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2011-IN; ante lo cual, la Entidad decidió no acoger lo solicitado, señalando que el artículo mencionado hace referencia a requisitos mínimos, siendo facultad del área usuaria elevar los estándares de calidad del requerimiento.

En ese contexto, y teniendo en cuenta lo cuestionado por el recurrente, respecto a la absolución señalada en los párrafos precedentes, mediante el Informe Técnico N° 023-2024-DIRIS-LN/3¹⁰, la Entidad indicó lo siguiente:

“Al respecto, en virtud a lo precisado en el informe técnico N° 022-2024-DIRIS-LN/3/UFSGT referente a la formación académica del Supervisor, se aclara que, se adecuara la formación académica con la finalidad de que no se generen interpretaciones subjetivas considerando que el grado técnico y el de bachiller son niveles establecidos en el marco de la normativa en la materia.

En ese contexto, sobre el entendido que el supervisor debe ser un profesional con capacidad resolutive, administrativa y operativa que se encargue de la ejecución y control de todas las actividades, compromisos y objetivos del servicio para la Entidad, no resulta necesario precisar determinadas carreras profesionales, pero si la formación superior, ya sea técnico superior o formación universitaria con el grado de bachiller, considerando que la formación secundaria resulta insuficiente para el desempeño de lo referido”.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento establecen que, en el caso de servicios, los términos de referencia que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye el personal necesario para la ejecución de la prestación para lo cual se debe detallar su

¹⁰ Mediante el Expediente N° 2024-0139744, de fecha 15 de octubre de 2024.

perfil mínimo y las actividades a desarrollar, así como clasificar al personal clave, esto es, aquél que resulta esencial para la ejecución de la prestación.

En tal sentido, corresponde señalar que la Entidad tiene potestad de incluir personal en el requerimiento, siempre que se detalle su perfil, entre lo cual se considera la formación académica, experiencia y capacitaciones, según corresponda, así como las funciones que desempeñará dentro de las actividades de la ejecución de la prestación; siendo que ello resulta necesario para la calificación que realiza el comité de selección, al momento de evaluar el personal propuesto por los oferentes, y para la determinación de los potenciales proveedores que cuentan con personal idóneo para la ejecución de la prestación.

Ahora bien, en atención al cuestionamiento orientado a dejar sin efecto la precisión efectuada en el pliego absolutorio, se aprecia que, mediante el citado informe técnico, la Entidad decidió dejar sin efecto la condición de que el “*grado técnico y/o universitario*” requerido para el “Supervisor de seguridad” sea necesariamente en “*Administración o afines*”, ello con la finalidad de que no se generen interpretaciones subjetivas; asimismo, señaló que no resulta necesario precisar determinadas carreras profesionales teniendo en cuenta las actividades que realizará tal personal.

Por su parte, respecto del cuestionamiento orientado a que únicamente se considere la secundaria completa para el “Supervisor de seguridad”, se aprecia que la Entidad mediante el referido informe técnico, ha señalado que tal formación académica no resulta suficiente para el desempeño del personal durante el servicio.

Así, se desprende que la Entidad, siendo la responsable de la determinación de su requerimiento y por ende, la mejor conocedora de sus necesidades, ha considerado que la formación académica requerida para el “Supervisor de seguridad” prevista en el requerimiento de las Bases de la convocatoria resulta suficiente para el desarrollo del servicio, bajo los argumentos expuestos en su informe técnico.

En ese sentido, considerando el análisis de los párrafos precedentes y dado que una de las pretensiones del recurrente está orientada a que se dejen sin efecto las modificaciones efectuadas a la formación académica del “Supervisor de seguridad” con ocasión de la integración de las Bases y se admita únicamente secundaria completa, y en la medida que, la Entidad ha admitido suprimir el extremo solicitado y denegó admitir la formación de secundaria completa; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **ACOGER PARCIALMENTE** el presente extremo del cuestionamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que en el acápite 12.1 del numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas se indica que la formación académica del “Supervisor de seguridad” se acreditará con “*copia grado a nombre de la nación*”; sin embargo, ello no se condice con la forma de acreditación prevista en las Bases Estándar aplicables al objeto de contratación.

Por tanto, considerando lo expuesto precedentemente, se emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- **Se adecuará** el acápite 12.1 del numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

12. PERFIL DEL PERSONAL SOLICITADO

El personal de seguridad que preste servicios en la DIRIS Lima Norte, podrá ser personal civil, o personal en retiro de las Fuerzas Armadas y/o Policiales.

12.1.SUPERVISOR DE SEGURIDAD (Personal Clave)

*j) Contar con **grado técnico y/o universitario** ~~Título técnico y/o Bachiller universitario en carreras de Administración y/o afines, se acreditará con copia grado a nombre de la nación.~~*

- **Se adecuará** el literal B.2.1 “Formación académica” del numeral 3.2 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

Requisitos:

*Contar con **grado técnico y/o universitario** ~~Título de técnico y/o Bachiller universitario en carreras de Administración y/o afines,~~ del personal clave requerido como SUPERVISOR.*

Acreditación:

*El **TÍTULO grado** será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/>, según corresponda.*

*En caso el **TÍTULO grado** no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de*

acreditar la formación académica requerida.

- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** toda aquella precisión de las Bases o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

c) Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 81:

Al respecto, mediante la absolución de la consulta y/u observación N° 81, la Entidad indicó que el grado de técnico y/o universitario será requerido para el personal civil propuesto por el contratista, y para el personal en retiro de las Fuerzas Armadas y/o Policiales, se acreditará con la resolución de baja, mientras ésta no sea por medida disciplinaria.

En relación con ello, cabe señalar que, sobre el requisito de calificación “Formación académica”, las Bases Estándar aplicables al objeto de contratación disponen que: *“En caso del personal de las fuerzas armadas o policiales en retiro, dicha condición se acredita mediante la resolución de baja respectiva”*.

Ahora bien, en atención del tenor de lo cuestionamiento, y a fin de evitar potenciales confusiones en los participantes, resulta razonable que en el acápite 12.1 del numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas se consigne lo señalado en el pliego absolutorio, considerando lo establecido en las Bases Estándar aplicables.

En ese sentido, considerando el análisis de los párrafos precedentes y dado que la pretensión del recurrente está orientada a que se uniformice la cuestionada condición de la formación académica del “Supervisor de seguridad”, tanto en el numeral 3.1 como en el numeral 3.2 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **ACOGER** el presente cuestionamiento; por lo que, se emitirá la siguiente disposición al respecto:

- **Se adecuará** el acápite 12.1 del numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

12.1.SUPERVISOR DE SEGURIDAD (Personal Clave)

j) (...) Para el personal en retiro de las Fuerzas Armadas y/o Policiales, se acreditará con la resolución de baja, mientras esta no sea por medida disciplinaria.

- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** toda aquella precisión de las Bases o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y **el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos**, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 4

Respecto a los “Factores de evaluación”

El participante **OPTIMUS SECURITY S.A.C.** cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 15, alegando que la Entidad incluyó indebidamente el factor de evaluación ISO 37001, pues ello no fue solicitado en el pliego absolutorio; por lo que, **la pretensión del participante está orientada a que se suprima dicho factor de evaluación.**

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que, en atención a la consulta y/u observación N° 15, la Entidad decidió incluir factores de evaluación relativos a los ISOS 9001-2015, 14001-2015 y 45001-2018.

Sin embargo, de la revisión de las Bases Integradas, se advierte que la Entidad decidió incorporar el factor de evaluación “D. Integridad en la contratación” relativo al ISO 37001 en el Capítulo IV de la Sección Específica, lo cual no se condice con lo señalado en el pliego absolutorio.

En ese contexto, y teniendo en cuenta lo cuestionado por el recurrente, respecto a la absolución señalada en los párrafos precedentes, mediante el Informe Técnico N° 022-2024-DIRIS-LN/3¹¹, la Entidad indicó lo siguiente: *“Al respecto, de la revisión realizada, el comité de selección suprime el factor de evaluación ISO 37001, el mismo que no se encontraba incluido en las bases administrativas”*.

Ahora bien, en atención del tenor de lo cuestionado, se aprecia que, mediante el citado informe técnico, la Entidad decidió suprimir el factor de evaluación “D. Integridad en la contratación” relativo al ISO 37001, lo cual resulta razonable, considerando que su inclusión excede la precisión efectuada ante la consulta y/u observación materia de análisis.

En ese sentido, considerando el análisis de los párrafos precedentes y dado que la pretensión del recurrente se encuentra orientada a que se suprima el factor de evaluación “D. Integridad en la contratación” relativo al ISO 37001 y en tanto que, mediante informe técnico, la Entidad admitió suprimir el extremo cuestionado; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **ACOGER** el presente cuestionamiento; por lo que se emitirá la siguiente disposición al respecto:

¹¹ Mediante el Expediente N° 2024-0134069, de fecha 3 de octubre de 2024.

- **Se suprimirá** el factor de evaluación “D. Integridad en la contratación” del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas. Asimismo, **se deberá redistribuir** el puntaje restante al factor de evaluación “A. Precio”.
- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** toda aquella precisión de las Bases o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y **el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos**, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 5

Respecto a la “Acreditación de licencia de funcionamiento municipal”

El participante **INVERSIONES GUEVARA S.A.C.** cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 39, alegando que la Entidad -de forma excesiva- solicita la acreditación de la copia de licencia de funcionamiento municipal, pues para la autorización de SUCAMEC se verifica que la empresa de seguridad y vigilancia cuente con oficina administrativa, armería y local para capacitación. Por lo tanto, **la pretensión del recurrente está orientada a que se suprima la condición de acreditar la licencia de funcionamiento municipal.**

Pronunciamiento

De la revisión del acápite 8 del numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

*d) El contratista deberá contar con la infraestructura que le permita contar con una oficina administrativa. **Presentar copia de la Licencia de funcionamiento municipal, y contrato de arrendamiento en caso de ser alquilado.***

Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 39, se solicitó que se suprima el requisito de presentación de la licencia municipal de funcionamiento de la oficina administrativa; ante lo cual, la Entidad se limitó a señalar que el contratista deberá contar con una infraestructura que le permita contar con una oficina administrativa, para lo cual deberá presentar una copia de la Licencia de funcionamiento municipal, y contrato de arrendamiento en caso de ser alquilado.

En ese contexto, y teniendo en cuenta lo cuestionado por el recurrente, respecto a la absolución señalada en los párrafos precedentes, mediante el Informe Técnico N° 022-2024-DIRIS-LN/3¹², la Entidad indicó lo siguiente:

*“Al respecto, tomando como referencia el Decreto Legislativo N° 1213 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2023-IN, Capítulo II, Artículo 9 y Artículo 10. Del local para prestar servicios de seguridad privada, **se acoge la observación y se suprime lo establecido en dicho literal (...)**”*

Al respecto, cabe señalar que, el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, establecen que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento (los términos de referencia en caso de servicios), debiendo éstos contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación.

Ahora bien, en atención del tenor de lo cuestionado, se aprecia que, mediante el citado informe técnico, la Entidad decidió suprimir la exigencia de acreditar Licencia de funcionamiento municipal de la oficina administrativa, para lo cual ha considerado los lineamientos de los artículos 9 y 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1213, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2023-IN.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente y dado que la pretensión del recurrente se encuentra orientada a que se suprima la condición de acreditar Licencia de funcionamiento municipal, y en tanto que mediante informe técnico, la Entidad ha admitido suprimir el extremo cuestionado; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **ACOGER** el presente cuestionamiento; por lo que se emitirá la siguiente disposición al respecto:

- **Se adecuará** el acápite 8 del numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

8. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

(...)

d) El contratista deberá contar con la infraestructura que le permita contar con una oficina administrativa. ~~Presentar copia de la Licencia de funcionamiento municipal, y contrato de arrendamiento en caso de ser alquilado.~~

- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** toda aquella precisión de las Bases o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

¹² Mediante el Expediente N° 2024-0134069, de fecha 3 de octubre de 2024.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y **el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos**, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 6

Respecto a la “Edad del personal”

El participante **INVERSIONES GUEVARA S.A.C.** cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 41, alegando que al requerirse que la edad máxima para el personal de seguridad debe ser de 65 años, la Entidad establece una condición limitante y discriminadora, siendo que, de acuerdo a la normativa de la materia sólo se establece como límite que los agentes tengan la mayoría de edad; por lo que, el recurrente **solicita que se suprima el límite de edad del personal supervisor de seguridad y agente de seguridad, y que se requiera únicamente la condición de ser mayor de edad.**

Pronunciamiento

De la revisión del acápite 12.1 del numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

12. PERFIL DEL PERSONAL SOLICITADO

El personal de seguridad que preste servicios en la DIRIS Lima Norte, podrá ser personal civil, o personal en retiro de las Fuerzas Armadas y/o Policiales.

12.1.SUPERVISOR DE SEGURIDAD (Personal Clave)

(...)

c) Edad, no mayor a sesenta y cinco (65) años

Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 41, se solicitó que se modifique la condición relativa a la edad de los agentes, considerando que la SUCAMEC no discrimina al personal por la edad, sino que únicamente requiere que sea mayor de edad; ante lo cual, la Entidad decidió no acoger la observación, señalando que el artículo 64 del Reglamento de la Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2011-IN, hace referencia a requisitos mínimos, no concluyentes, siendo que el límite máximo de edad establecido es congruente con las exigencias y naturaleza de la contratación.

Sobre el particular, cabe señalar que las Bases Estándar aplicables al objeto de contratación disponen que no corresponde determinar la composición del personal

requerido para la prestación del servicio de vigilancia, en virtud de parámetros de nacionalidad, **edad** o talla mínima pues ello no incide en la prestación del servicio.

Por su parte, el artículo 24 del Decreto Legislativo N° 1213, Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada, dispone que **el personal de seguridad debe cumplir como mínimo, entre otros, el requisito de ser mayor de edad.**

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que la condición de que el supervisor de seguridad y los agentes de vigilancia cuenten necesariamente con una edad máxima de 65 años, resulta contrario a lo previsto en las citadas Bases Estándar, pues aquéllas disponen que no debe determinarse la composición del personal en virtud de parámetros tales como la edad, siendo razonable que únicamente se requiera que tal personal sea mayor de edad, conforme a los requisitos mínimos previstos en la normativa de la materia.

En ese sentido, considerando el análisis de los párrafos precedentes y dado que la pretensión del recurrente se encuentra orientada a que se suprima el límite máximo de edad requerido al personal, y en la medida que tal pretensión no resulta acorde a lo previsto en las Bases Estándar y la normativa de la materia; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **ACOGER** el presente cuestionamiento. Por tanto, se emitirá la siguiente disposición al respecto:

- **Se adecuará** el acápite 12.1 del numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, conforme a lo siguiente:

12. PERFIL DEL PERSONAL SOLICITADO

El personal de seguridad que preste servicios en la DIRIS Lima Norte, podrá ser personal civil, o personal en retiro de las Fuerzas Armadas y/o Policiales.

12.1.SUPERVISOR DE SEGURIDAD (Personal Clave)

(...)

c) Edad, *ser mayor de edad. no mayor a sesenta y cinco (65) años*

12.2 AGENTE DE VIGILANCIA

(...)

b) Edad, *ser mayor de edad. no mayor a sesenta y cinco (65) años*

- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** toda aquella precisión de las Bases o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y **el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos**, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 7

Respecto a las “Capacitaciones del personal”

El participante **INVERSIONES GUEVARA S.A.C.** cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 46, alegando que la Entidad no aclaró si las capacitaciones podrán ser realizadas por los CEFOESP o por el área de capacitación de la empresa de seguridad y vigilancia o podrá ser realizado por ambas entidades; por lo que, **solicita que se precise qué entidades pueden emitir las capacitaciones requeridas.**

El participante **OPTIMUS SECURITY S.A.C.** cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 46, N° 82 y N° 279, alegando lo siguiente:

- **Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 46:**

Al respecto, el participante cuestiona que la “capacitación en bioseguridad” sea necesariamente emitida por instituciones públicas o privadas autorizadas por SUNEDU y/o SUCAMEC, pues resulta una condición restrictiva que vulnera el Principio de Libre Concurrencia. Por tanto, el recurrente **solicita que se confirme que las capacitaciones requeridas pueden ser brindadas por instituciones públicas y/o privadas.**

- **Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 82:**

Al respecto, el participante cuestiona que la “capacitación en seguridad integral” sea emitida por institución pública o privada autorizada por Ministerio de Educación y/o SUCAMEC o por instructores autorizados por SUCAMEC, pues las capacitaciones requeridas no están comprendidas en el plan de estudios aprobado mediante RS N° 1145-2021-SUCAMEC, asimismo, tal exigencia constituye una condición restrictiva y discriminatoria que vulnera el principio de Libre Concurrencia. Por tanto, **el participante solicita que se suprima tal condición y que los cursos sean brindados por una institución pública o privada.**

- **Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 279:**

Al respecto, el participante cuestiona que la Entidad, si bien habría aceptado que las capacitaciones se acrediten mediante “Certificado y/o Constancia expedida por una Institución Pública o Privada”, lo cierto es que ello no fue

precisado en las Bases Integradas. Por tanto, **el participante solicita que se modifique el literal g) del numeral 12.1 Perfil del Supervisor y se precise lo aceptado en el pliego absolutorio.**

Pronunciamiento

De la revisión del acápite 12.1 del numeral 3.1 y el requisito de calificación “B.2.2 Capacitación” del numeral 3.2, ambos del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

3.1 Términos de Referencia

(...)

12.1 Supervisor de seguridad

*g) **Diplomado** en Seguridad Integral de no menos de ciento veinte (120) horas lectivas, emitido por una Institución Educativa pública o privada debidamente autorizada por el Ministerio de Educación y/o SUCAMEC o por instructores autorizados por SUCAMEC, se acreditará con copia del certificado de estudios y/o constancia.*

(...)

3.2 Requisitos de calificación

(...)

B.2.2 Capacitación

Requisitos:

- **Capacitación en bioseguridad** del personal clave requerido como SUPERVISOR con certificación de ochenta (80) horas lectivas como mínimo.*
- **Capacitación en Seguridad Integral** del personal clave requerido*

como SUPERVISOR de no menos de ciento veinte (120) horas lectivas.
(...)

Al respecto, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente:

- Mediante la consulta y/u observación N° 46, se solicitó que los cursos sean brindados por la empresa de seguridad mediante los instructores autorizados por la SUCAMEC; ante lo cual, la Entidad señaló que se aceptarán cursos impartidos por instituciones públicas o privadas autorizadas por SUNEDU y/o SUCAMEC, además podrán ser impartidas por un instructor, siempre y cuando el curso requerido se encuentre en la relación de cursos que pueda brindar el instructor.
- Mediante la consulta y/u observación N° 82, se solicitó que se suprima la exigencia de requerir que el “Diplomado en Seguridad Integral” sea necesariamente emitido por una Institución Educativa pública o privada debidamente autorizada por el Ministerio de Educación; ante lo cual, la Entidad señaló que dicha capacitación podrá ser impartida por una institución pública o privada autorizada por SUCAMEC.
- Mediante la consulta y/u observación N° 279, se solicitó que se permita que el curso de seguridad integral pueda ser impartido por una institución pública o privada especializada y/o empresa de seguridad autorizada por SUCAMEC; ante lo cual, la Entidad señaló que la capacitación requerida podrá ser acreditada mediante Certificado y/o Constancia expedida por una Institución Pública o Privada.

En ese contexto, y teniendo en cuenta lo cuestionado por el recurrente, respecto a la absolución señalada en los párrafos precedentes, mediante el Informe Técnico N° 022-2024-DIRIS-LN/3¹³, la Entidad indicó lo siguiente:

Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 46:

“Al respecto se aclara que para efectos de adecuar el requerimiento a la normativa de compras públicas y principio de libre concurrencia las capacitaciones en bioseguridad podrán ser brindadas por instituciones públicas y/o privadas autorizadas por el Ministerio de Educación, se acreditará para la firma del contrato con copia del certificado de estudios o constancia de capacitación”.

Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 82 y 279:

¹³ Mediante el Expediente N° 2024-0134069, de fecha 3 de octubre de 2024.

“Al respecto se aclara que para efectos de adecuar el requerimiento a la normativa de compras públicas y principio de libre concurrencia las capacitaciones en Seguridad Integral podrán ser brindadas por instituciones públicas y/o privadas autorizadas por el Ministerio de Educación, se acreditará para la firma del contrato con copia del certificado de estudios o constancia de capacitación”.

Ahora bien, en atención del tenor de lo cuestionado, cabe señalar que la normativa de contratación pública no ha establecido que sólo deberían aceptarse capacitaciones por determinadas instituciones o “entes especializados”; por el contrario, se ha determinado que la capacitación debe estar estrictamente relacionada a la función o actividad a ejecutar, por lo que lo señalado por la Entidad excedería los lineamientos contemplados en la normativa de contratación pública respecto de la acreditación de las capacitaciones.

En relación con ello, es oportuno precisar que el literal e) del artículo 19 del Decreto Legislativo N° 1213, Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada, señala que las empresas especializadas de seguridad privada tienen la obligación de *“capacitar al personal de seguridad, de conformidad con el Capítulo VII del presente decreto legislativo y las directivas que emita la SUCAMEC”*.

Es así que, en cuanto a la regulación de las instituciones facultadas para capacitar, el numeral 37.1 del artículo 37 del Decreto Legislativo N° 1213, establece que las actividades de formación básica, perfeccionamiento o especialización son realizadas por:

- a) Centros de Formación y Especialización en Seguridad Privada (CEFOESP) constituidos por personas jurídicas autorizadas por SUCAMEC.
- b) Departamentos de capacitación de las empresas de servicios de seguridad privada.
- c) Universidades o institutos superiores, públicos o privados.

Por su parte, el numeral 71.1 del artículo 71 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1213, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2023-IN, establece que el o la capacitadora en seguridad privada es la persona natural que cuenta con autorización expedida por la SUCAMEC para impartir enseñanza en materia de servicios de seguridad privada.

Así, resulta pertinente señalar que las capacitaciones requeridas pueden ser brindadas por personas naturales o jurídicas que cuenten con todas las competencias legales para brindar la capacitación en el rubro solicitado.

En ese sentido, considerando el análisis de los párrafos precedentes y dado que la pretensión de los recurrentes está orientada a que se confirme que las referidas capacitaciones sean impartidas por instituciones públicas y/o privadas, y en la medida

que resulta necesario que aquellas cuenten con todas las competencias legales para brindar la capacitación en el rubro solicitado; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **ACOGER PARCIALMENTE** el presente extremo del cuestionamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, se aprecia que la Entidad, mediante el citado informe técnico ha señalado que las capacitaciones en “seguridad integral” y “bioseguridad” deberán acreditarse para la firma del contrato, mediante certificado de estudios o constancia de capacitación; por lo que, no corresponde que dichas capacitaciones formen parte del requisito de calificación “Capacitación”, debiendo formar parte del numeral 3.1 del Capítulo III, siendo acreditadas para la presentación de ofertas con el Anexo N° 3.

Por tanto, considerando lo expuesto precedentemente, se emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- **Se adecuará** el acápite 12.1 del numeral 3.1 y el requisito de calificación “B.2.2. Capacitación” del numeral 3.2 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

3.1 Términos de Referencia

(...)

12.1 Supervisor de seguridad

g) Capacitaciones en Seguridad Integral de no menos de ciento veinte (120) horas lectivas, impartidos por personas naturales o jurídicas que cuenten con todas las competencias legales para brindar la capacitación ~~una Institución Educativa pública o privada debidamente autorizada por el Ministerio de Educación y/o SUCAMEC o por instructores autorizados por SUCAMEC~~, se acreditará con copia del certificado de estudios y/o constancia.

-Capacitación en bioseguridad del personal clave requerido como SUPERVISOR con certificación de ochenta (80) horas lectivas como mínimo, impartido por personas naturales o jurídicas que cuenten con todas las competencias legales para brindar la capacitación.

3.2 Requisitos de calificación

(...)

B.2.2. Capacitación

Requisitos:

~~-Capacitación en Seguridad Integral del personal clave requerido como SUPERVISOR de no menos de ciento veinte (120) horas lectivas.~~

~~-Capacitación en bioseguridad del personal clave requerido como SUPERVISOR con certificación de ochenta (80) horas lectivas como mínimo.~~

-Capacitación básica, con un mínimo de dos (02) horas académicas por curso en:

Primeros auxilios

Lucha contra incendios

Manejo de extintores.

Las referidas capacitaciones deben ser brindadas por personas naturales o jurídicas que cuenten con todas las competencias legales para brindar la capacitación.

- **Se incluirá** en el numeral 2.3 del Capítulo II, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, lo siguiente:

q) Certificado de estudios o constancia de capacitación en Seguridad Integral del personal clave requerido como SUPERVISOR de no menos de ciento veinte (120) horas lectivas. La capacitación debe ser brindada por personas naturales o jurídicas que cuenten con todas las competencias legales para brindar la capacitación.

r) Certificado de estudios o constancia de capacitación en bioseguridad del personal clave requerido como SUPERVISOR con certificación de ochenta (80) horas lectivas como mínimo. La capacitación debe ser brindada por personas naturales o jurídicas que cuenten con todas las competencias legales para brindar la capacitación.

- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** toda aquella precisión de las Bases o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

Sin perjuicio de ello, asimismo, se advierte que las Bases requieren que el personal “Armero” se encuentre debidamente capacitado por las fuerzas armadas y/o

policiales; no obstante, ello no resultaría congruente con lo dispuesto en el análisis del presente cuestionamiento.

Por tanto, considerando lo expuesto precedentemente, se emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- **Se adecuará** el acápite 7 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, conforme lo siguiente:

7. OTRAS CONDICIONES DEL SERVICIO:

(...)

e) El contratista deberá contar con un personal armero debidamente capacitado por personas naturales o jurídicas que cuenten con todas las competencias legales para brindar la capacitación ~~las fuerzas armadas y/o policiales~~, para la manipulación y mantenimiento del armamento utilizado para el servicio. Se acreditará la capacitación del armero para la firma de contrato, mediante copia de certificados y/o constancias.

- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** todo extremo de las Bases y/o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y **el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos**, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 8

Respecto a los “Equipos de comunicación”

El participante **INVERSIONES GUEVARA S.A.C.** cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 70, N° 134, N° 136 y N° 201, conforme a lo siguiente:

- **Respecto de la absolución de las consultas y/u observaciones N° 70 y N° 134:**

Al respecto, el participante cuestiona que la Entidad haya incluido la condición de acreditar la autorización de frecuencia emitida por el MTC, pues no resulta coherente solicitarla, considerando el objeto del servicio y que no estaba prevista en los Términos de Referencia, lo cual implicaría también que las empresas que participaron durante la indagación de mercado deban cumplir ello, asimismo, refiere que tal condición vulnera el Principio de Libre Concurrencia.

Por lo tanto, **la pretensión del recurrente está orientada a que se suprima la condición de acreditar la autorización de frecuencia emitida por el MTC de las Bases Integradas.**

- **Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 136:**

Al respecto, el participante cuestiona que la Entidad no haya aceptado incluir los radios PoC, y que únicamente se permita radios que operan bajo las frecuencias UHF y VHF, a pesar que los radios PoC cuentan con un alcance mayor, sistema de seguridad alta, interferencia baja, capacidad para mensajes de texto, uso de banda ancha, programación en el aire y registro de eventos.

Asimismo, refiere que al requerir únicamente equipos de comunicación en la banda VHF se va a generar un encarecimiento en la prestación del servicio y una afectación en la pluralidad de postores pues la cantidad de empresas con licencia para uso de ese tipo de sistemas de comunicación es reducido.

Por lo tanto, **la pretensión del recurrente está orientada a que se permita brindar el servicio utilizando los radios PoC.**

- **Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 201:**

Al respecto, el participante cuestiona que la Entidad exija que la “*autorización de uso de frecuencia de radio*” deba estar a nombre del postor y que no pueda estar a nombre de un tercero, con lo cual no se estaría considerando la forma de acreditación que prevén las Bases Estándar aplicables y se estaría vulnerando el Principio de Libre Concurrencia.

Por lo tanto, **la pretensión del recurrente está orientada a que se suprima la condición de acreditar la autorización de frecuencia emitida por el MTC a nombre del postor o que en su defecto se brinde la posibilidad de que los equipos sean alquilados y no únicamente propios.**

El participante **DEFION SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A.C.** cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 70, señalando que la autorización de frecuencia emitida por el MTC resulta una condición no prevista originalmente en las Bases de la convocatoria, siendo que el comité de selección no ha considerado las especificaciones técnicas de la radio Handy, y que el contratista se encontraría obligado a obtener la referida autorización para 197 estaciones radiales. Por lo tanto, **la pretensión del recurrente está orientada a que la Entidad suprima la condición de acreditar la autorización de frecuencia emitida por el MTC de las Bases Integradas, y se admitan otras alternativas.**

Pronunciamiento

De la revisión del acápite 5.4.3 del numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

5.4.3. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

1) El contratista deberá mantener un sistema de comunicación para los diferentes puestos de vigilancia con enlace entre los puntos lejanos, el centro de control que se instalará en la sede administrativa y el Supervisor de Seguridad de la DIRIS Lima Norte. El contratista proveerá, de un (01) equipo celular con línea post pago con capacidad ilimitada para llamadas a cualquier operador fijo o móvil de Lima Metropolitana, con contrato de datos permanente, de una gama acorde a la necesidad propia de una comunicación de calidad sin interferencias, que permita una comunicación fluida. Por ningún motivo se aceptarán equipos celulares básicos que no cuenten con datos móviles. El contratista designará el responsable del equipo en cada establecimiento de salud y/o sede administrativa, el mismo que será de uso exclusivo para el puesto de vigilancia, debiendo relevarse con el personal entrante. La relación de equipos, números y responsables de su uso, será entregada a la Unidad Funcional de Servicios Generales y Transportes a la activación del servicio.

2) El contratista deberá entregar a la activación del servicio los equipos móviles para todos los puestos de vigilancia, supervisores residentes y Supervisor de Seguridad de la DIRIS Lima Norte.

3) Para la Sede Administrativa (incluye a los supervisores residente y supervisor de seguridad y vigilancia de la DIRIS Lima Norte). **Almacén de medicamentos y Centros Materno Infantiles, el contratista implementará un sistema de comunicación local con equipos Handy,** que permita una comunicación fluida y de respuesta instantánea, en este caso cada puesto de vigilancia deberá contar con equipo, el mismo que se revelara al cambio de turno. La omisión y/o retraso de esta disposición será sujeto de penalidad por cada día de retraso.

Al respecto, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente:

- Mediante la consulta y/u observación N° 70, se solicitó que se confirme que no es necesario la resolución del MTC para la prestación del servicio con equipos HANDY; ante lo cual, la Entidad señaló que los postores deberán acreditar la autorización de uso de radios emitidos por el MTC.
- Mediante la consulta y/u observación N° 134, se solicitó que se aclare si las radios solicitadas deberán contar con alguna autorización del MTC y bajo qué frecuencia; ante lo cual, la Entidad señaló que la autorización del MTC se acreditará para la presentación de la oferta bajo la frecuencia VHF/UHF.
- Mediante la consulta y/u observación N° 136, se solicitó considerar las radios Radio PoC (Ptt over Celular) en lugar de las radios HANDY; ante lo cual, la

Entidad no acogió lo solicitado, señalando además que se debe acreditar la autorización emitida por el MTC en la presentación de la oferta.

- Mediante la consulta y/u observación N° 201, se solicitó aclarar si la autorización de uso de frecuencia de Radio deberá estar a nombre del postor o podrá estar a nombre de un tercero que provea el servicio de alquiler de radios al contratista y que se encuentre autorizado por el Ministerio de Transportes y comunicaciones; ante lo cual, la Entidad señaló que la autorización de uso de frecuencia de Radio deberá estar a nombre del postor participante.

En ese contexto, y teniendo en cuenta lo cuestionado por el recurrente, respecto a la absolución señalada en los párrafos precedentes, mediante el Informe Técnico N° 022-2024-DIRIS-LN/3¹⁴, la Entidad indicó lo siguiente:

*“Al respecto, de la revisión del requerimiento y de la solicitud de elevación de los cuestionamientos para el pronunciamiento del OSCE, **con la finalidad de mantener los principios de libre concurrencia se SUPRIME el requerimiento específico de radios HANDY, incorporando en su lugar el sistema de comunicación local portatil (no telefónico) que no requieran autorización del MTC”.***

Asimismo, mediante el Informe Técnico N° 023-2024-DIRIS-LN/3, la Entidad indicó lo siguiente:

*“Al respecto, en virtud a lo observado sobre el uso de un sistema de comunicación local, se precisó en el informe técnico N° 022-2024-DIRIS-LN/3/UFGST que se suprime el término Handy, por un sistema de comunicación radial, aceptando lo expuesto por los recurrentes de no limitar el acceso en virtud al principio la libre concurrencia y de conformidad con el principio de pluralidad; **no resulta necesario que los equipos de comunicación local cuenten con autorización del MTC, sobre el entendido que el alcance de estos equipos es de no más de 200 metros, no limitando la inclusión de radios PoC y/o Handy”.***

Al respecto, cabe señalar que, el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, establecen que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento (los términos de referencia en caso de servicios), debiendo éstos contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación.

Ahora bien, en atención del tenor de lo cuestionado, se aprecia que, mediante el citado informe técnico, la Entidad decidió dejar sin efecto la condición de que los equipos de comunicación cuenten necesariamente con “*autorización de uso de radios emitidos por el MTC*”, asimismo, señala que se permitirá que el sistema de

¹⁴ Mediante el Expediente N° 2024-0134069, de fecha 3 de octubre de 2024.

comunicación requerido pueda funcionar utilizando radios PoC o Handy u otro sistema de comunicación local portátil (no telefónico) que no requiera autorización del MTC; lo cual, según refiere, favorecerá la libre concurrencia de postores.

Así, se desprende que la Entidad, siendo la responsable de la determinación de su requerimiento y, por ende, la mejor conocedora de sus necesidades, ha considerado pertinente dejar sin efecto la condición incluida en el pliego absolutorio, aclarando que aceptará mayores opciones a las previstas inicialmente, bajo los argumentos expuestos en su informe técnico.

En ese sentido, considerando el análisis de los párrafos precedentes y dado que la pretensión del recurrente está orientada a que se dejen sin efecto las modificaciones relativas a la acreditación de los equipos de comunicación y en la medida que la Entidad mediante su informe admitió tal pretensión del recurrente; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **ACOGER** el presente cuestionamiento. Por tanto, se emitirá la siguiente disposición al respecto:

- **Se adecuará** el acápite 5.4.3 del numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

5.4.3. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Para la Sede Administrativa (incluye a los supervisores residente y supervisor de seguridad y vigilancia de la DIRIS Lima Norte), Almacén de medicamentos y Centros Materno Infantiles, el contratista implementará un sistema de comunicación local con equipos Handy o PoC u otro sistema de comunicación local portátil (no telefónico) que no requieran autorización del MTC, que permita una comunicación fluida y de respuesta instantánea, en este caso cada puesto de vigilancia deberá contar con equipo, el mismo que se revelara al cambio de turno. La omisión y/o retraso de esta disposición será sujeto de penalidad por cada día de retraso. ~~Se precisa que para la presentación de los equipos de comunicación requeridos los postores deberán acreditar la autorización de uso de radios emitidos por el MTC, dicha acreditación se presentará para presentación de la oferta.~~

- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** toda aquella precisión de las Bases o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y **el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos**, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 9

Respecto de las “Otras penalidades”

El participante **OPTIMUS SECURITY S.A.C.** cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 86, N° 87, N° 192 y N° 208, conforme a lo siguiente:

- **Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 86:**

El participante cuestionó la penalidad N° 22, señalando que al aplicar dicha penalidad se estaría sancionando dos veces al contratista por el mismo hecho, toda vez que además de la aplicación de la penalidad se deberá reponer el bien objeto de pérdida, robo o hurto, lo cual estaría vulnerando el Principio del Debido Procedimiento, previsto en la Ley General del Procedimiento Administrativo General.

Por lo tanto, **la pretensión del recurrente está orientada a que se suprima la penalidad N° 22, y que únicamente se realice la reposición del bien objeto de pérdida, robo o hurto.**

- **Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 87:**

El participante cuestionó la penalidad N° 10, señalando que al aplicar dicha penalidad se estaría sancionando dos veces al contratista por el mismo hecho, toda vez que además de la aplicación de la penalidad se deberá reparar el bien dañado, lo cual estaría vulnerando el Principio del Debido Procedimiento, previsto en la Ley General del Procedimiento Administrativo General.

Por lo tanto, **la pretensión del recurrente está orientada a que se suprima la penalidad N° 10 y que únicamente se realice la reparación del bien dañado.**

- **Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 192:**

El participante cuestionó la penalidad N° 38, señalando que al aplicar dicha penalidad se estaría sancionando dos veces al contratista por el mismo hecho, toda vez que, además de la aplicación de la penalidad se deberá reponer el bien objeto de pérdida, robo o hurto, lo cual estaría vulnerando el Principio del Debido Procedimiento, previsto en la Ley General del Procedimiento Administrativo General.

Por lo tanto, **la pretensión del recurrente está orientada a que se modifique la penalidad N° 38, aplicándose por siniestro o evento y no por cada día de atraso.**

- **Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 208:**

El participante cuestionó el procedimiento de aplicación de penalidades, señalando que dicho procedimiento no permitiría que el contratista ejerza su derecho de defensa mediante sus descargos, siendo un procedimiento

arbitrario que estaría vulnerando el Principio del Debido Procedimiento, previsto en la Ley General del Procedimiento Administrativo General.

Por lo tanto, **la pretensión del recurrente está orientada a solicitar que se modifique el procedimiento de aplicación de penalidades, considerando plazos razonables para los descargos del contratista, en cumplimiento del debido procedimiento.**

Pronunciamiento

De la revisión del acápite 16.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente:

<i>ITEM</i>	<i>INCUMPLIMIENTO</i>	<i>PENALIDAD</i>	<i>PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN</i>
<i>(...)</i>			<i>EN TODOS LOS CASOS EL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRIS LIMA NORTE ESTARÁ A CARGO DE LA VERIFICACIÓN, QUIEN LEVANTARÁ UN ACTA DE CONSTANCIA POR CADA INCUMPLIMIENTO, CONSIGNANDO LA FALTA COMETIDA. SE CONSIDERA COMO DOCUMENTO VALIDO PARA LA CERTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO, LA</i>
<i>10</i>	<i>Causar daños a los equipos, bienes y/o instalaciones.</i>	<i>S/ 500 y retiro inmediato del agente o supervisor.</i>	
<i>(...)</i>			
<i>22</i>	<i>Por pérdidas, sustracciones y hurtos a bienes de propiedad de la DIRIS LN y/o de terceros debidamente registrados, debido al mal ejercicio de sus funciones durante la ejecución del</i>	<i>Una (01) UIT (independientemente de la reparación y/o reposición y acciones administrativas y/o legales que amerite cada caso)</i>	

	<i>servicio.</i>		INFORMACIÓN REMITIDA POR LA JEFATURA MÉDICA O RESPONSABLE DE SEDE ADMINISTRATIVA DONDE SE HAYA DETECTADO EL INCUMPLIMIENTO O FALTA.
(...)			
38	<i>No reponer la totalidad de los bienes</i>	<i>S/ 500.00 por cada día de atraso.</i>	

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD

El Supervisor de Seguridad de Servicios Generales estará a cargo de la verificación, el mismo que levantará un acta consignando la fecha, hora y falta cometida, así mismo, se considerará como documento válido para la certificación del incumplimiento, la información remitida a la Entidad por el responsable del establecimiento o de quien se designe en su lugar.

Una vez elaborada el acta de incumplimiento, esta deberá ser firmada por quien(es) comenta(n) la falta, de negarse a firmar, se dejará constancia de ello en el acta y esta será validada por el responsable del establecimiento o quien se encuentre a cargo.

Para el caso de cuando se reciba comunicación del responsable del establecimiento sobre una falta cometida, el acta deberá ser firmada por el supervisor residente del contratista; de negarse a firmar el acta, se dejará constancia de ellos considerando como válido el documento.

Las penalidades serán descontadas de manera automática del monto del comprobante pendiente de pago más próximo que corresponda, o del pago final, o de ser necesario; del monto resultante de la garantía de fiel cumplimiento.

Las penalidades serán ejecutadas sin perjuicio de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, la aplicación de otras penalidades, de la resolución del contrato, de la responsabilidad civil y de las acciones legales pertinentes.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 163 del Reglamento, señala que “*los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, siempre que sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar*”.

En relación a ello, debe tenerse en cuenta que el objeto de una penalidad es **disuadir** al contratista del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de las prestaciones a las que se comprometió al momento de presentar su oferta. Por tanto, los supuestos bajo los cuales se configura su aplicación deben estar directamente relacionados con la prestación del contratista, siendo potestad de la Entidad definir las “otras penalidades” – distintas a la penalidad por mora- que estime necesarias, siempre y cuando reúnan las siguientes características: objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación

Al respecto, a fin de atender los citados cuestionamientos al pliego absolutorio, y en atención a la afinidad entre los mismos, se procederá a efectuar su análisis a través de los siguientes **cuatro (4) extremos**:

a) Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 86:

Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 86, se solicitó que se suprima la penalidad N° 22, pues con su aplicación se estaría sancionando dos veces al contratista por la comisión de una misma infracción, lo cual estaría vulnerando el Principio del Debido Procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General; ante lo cual, la Entidad decidió no aceptar lo solicitado, señalando que dicha penalidad sanciona el mal ejercicio de funciones que deriva en un hecho determinado, independientemente de la reposición del bien o bienes sustraídos.

En ese contexto, y teniendo en cuenta lo cuestionado por el recurrente, respecto a la absolución señalada en los párrafos precedentes, mediante Informe Técnico N° 022-2024-DIRIS-LN/3¹⁵, la Entidad indicó lo siguiente:

*“(…) Al respecto se señala en el pliego absolutorio **NO SE ACOGE la observación**. Se precisa que no se sanciona dos veces por el mismo hecho, la penalidad establece la sanción por un mal ejercicio de funciones que derivan en un hecho determinado, independientemente de la reposición del bien o bienes sustraídos.*

Siendo que la finalidad pública es la de seleccionar a una empresa especializada que se encargue de salvaguardar y custodiar los bienes patrimoniales que

¹⁵ Mediante el Expediente N° 2024-0134069, de fecha 3 de octubre de 2024.

administra la DIRIS Lima Norte, así como proteger la integridad física de su personal y del público usuario, con el propósito de prevenir daños ante cualquier eventualidad y brindar seguridad para el normal desarrollo de sus actividades funcionales, y el objetivo específico es la custodia y seguridad de los establecimientos de salud y sedes administrativas de la DIRIS Lima Norte, a fin de mantener los bienes patrimoniales, instalaciones, materiales, equipos, insumos, personal y usuarios a buen recaudo; resulta de vital importancia establecer los mecanismos que aseguren que las prácticas realizadas para tal efecto, estén acorde con el requerimiento y la propuesta del postor, entendiéndose que no toda pérdida o hurto se deriva de una mal ejercicio de sus funciones, y que está establecido un procedimiento para la determinación de responsabilidades en caso de pérdida, hurto o daño de bienes de propiedad de la Entidad y/o de terceros debidamente registrados”.

(El subrayado y resaltado es agregado)

Asimismo, mediante Informe Técnico N° 023-2024-DIRIS-LN/3¹⁶, la Entidad indicó lo siguiente:

“(…) Se aclara y precisa que el término ‘mal ejercicio de funciones’ está referido al incumplimiento de las tareas básicas señaladas en el literal t) del numeral 5.2 Descripción del servicio; en el cual se precisan dichas tareas, considerándose toda acción no realizada u omisión en virtud a ello, como un mal ejercicio de funciones asignadas, según se detalla”.

Ahora bien, en atención del tenor de lo cuestionado, se aprecia que, mediante el citado informe técnico, la Entidad decidió ratificar la penalidad N° 22, señalando que tal penalidad resulta ser un mecanismo de vital importancia para el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación; la cual busca, entre otros, salvaguardar y custodiar los bienes patrimoniales.

Asimismo, ha señalado que dicha penalidad sólo se aplicará con ocasión de un “mal ejercicio de funciones” del personal, esto es, por el incumplimiento de las tareas básicas señaladas en el literal t) del numeral 5.2 Descripción del servicio, siendo que de manera previa se realizará un procedimiento de determinación de responsabilidades.

Así también, la Entidad ha señalado que la aplicación de la referida penalidad no ocasiona una doble sanción al contratista, pues la reposición del bien es una condición independiente del requerimiento, que deviene de una previa determinación de responsabilidades.

Así, se desprende que la Entidad, siendo la responsable de la determinación de su requerimiento y, por ende, la mejor conocedora de sus necesidades, ha decidido ratificar la penalidad N° 22 prevista en el requerimiento, bajo los argumentos

¹⁶ Mediante el Expediente N° 2024-0139744, de fecha 15 de octubre de 2024.

expuestos en su informe técnico. Lo cual, afirma en calidad de declaración jurada y está sujeto a rendición de cuentas.

Adicionalmente, cabe indicar que en el numeral 4.2 del “Formato de Resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias”, la Entidad declaró la existencia de pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir con el íntegro del requerimiento, lo cual incluyó las otras penalidades.

En ese sentido, considerando el análisis de los párrafos precedentes y dado que la pretensión del recurrente está orientada a que se suprima la penalidad N° 22, y en la medida que, la Entidad mediante su informe ha ratificado dicha penalidad, señalando las razones que sustentan su decisión; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **NO ACOGER** el presente extremo del cuestionamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que la Entidad mediante su informe técnico brindó mayores alcances que precisan la condición de “*mal ejercicio de funciones*” de la penalidad N° 22, se emitirá la siguiente disposición al respecto:

- **Se adecuará** el acápite 16.2 del numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

“Por pérdidas, sustracciones y hurtos a bienes de propiedad de la DIRIS LN y/o de terceros debidamente registrados, debido al mal ejercicio de sus funciones durante la ejecución del servicio.

El término ‘mal ejercicio de funciones’ está referido al incumplimiento de las tareas básicas señaladas en el literal t) del numeral 5.2 Descripción del servicio; en el cual se precisan dichas tareas, considerándose toda acción no realizada u omisión en virtud a ello, como un mal ejercicio de funciones asignadas”.

- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** toda aquella precisión de las Bases o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

b) Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 87:

Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 87, se solicitó que se suprima la penalidad N° 10, pues con su aplicación se estaría sancionando dos veces al contratista por la comisión de una misma infracción, lo cual estaría vulnerando el Principio del Debido Procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General; ante lo cual, la Entidad decidió no aceptar lo solicitado, señalando que dicha penalidad sanciona el mal ejercicio de funciones que deriva en un hecho determinado, independientemente de la reposición del bien o bienes dañados.

En ese contexto, y teniendo en cuenta lo cuestionado por el recurrente, respecto a la absolución señalada en los párrafos precedentes, mediante Informe Técnico N° 022-2024-DIRIS-LN/3¹⁷, la Entidad indicó lo siguiente:

“(…) Al respecto se señala en el pliego absolutorio NO SE ACOGE la observación. Se precisa que no se sanciona dos veces por el mismo hecho, la penalidad establece la sanción por un mal ejercicio de funciones que derivan en un hecho determinado (…)

Siendo que la finalidad pública es la de seleccionar a una empresa especializada que se encargue de salvaguardar y custodiar los bienes patrimoniales que administra la DIRIS Lima Norte, así como proteger la integridad física de su personal y del público usuario, con el propósito de prevenir daños ante cualquier eventualidad y brindar seguridad para el normal desarrollo de sus actividades funcionales, y el objetivo específico es la custodia y seguridad de los establecimientos de salud y sedes administrativas de la DIRIS Lima Norte, a fin de mantener los bienes patrimoniales, instalaciones, materiales, equipos, insumos, personal y usuarios a buen recaudo; resulta de vital importancia establecer los mecanismos que aseguren que las prácticas realizadas para tal efecto, estén acorde con el requerimiento y la propuesta del postor, entendiéndose que no toda pérdida o hurto se deriva de una mal ejercicio de sus funciones, y que está establecido un procedimiento para la determinación de responsabilidades en caso de pérdida, hurto o daño de bienes de propiedad de la Entidad y/o de terceros debidamente registrados”. ”.

Ahora bien, en atención del tenor de lo cuestionado, se aprecia que, mediante el citado informe técnico, la Entidad decidió ratificar la penalidad N° 10, señalando que tal penalidad resulta ser un mecanismo de vital importancia para el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, la cual busca, entre otros, salvaguardar y custodiar los bienes patrimoniales; asimismo, refirió que tal penalidad se aplicará previa determinación de responsabilidades.

Así también, la Entidad ha señalado que la aplicación de la referida penalidad no ocasiona una doble sanción al contratista, pues la reposición del bien es una condición independiente del requerimiento, que deviene de una previa determinación de responsabilidades.

Así, se desprende que la Entidad, siendo la responsable de la determinación de su requerimiento y, por ende, la mejor conocedora de sus necesidades, ha decidido ratificar la penalidad N° 10 prevista en el requerimiento, bajo los argumentos expuestos en su informe técnico. Lo cual, afirma en calidad de declaración jurada y está sujeto a rendición de cuentas.

¹⁷ Mediante el Expediente N° 2024-0134069, de fecha 3 de octubre de 2024.

Adicionalmente, cabe indicar que en el numeral 4.2 del “Formato de Resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias”, la Entidad declaró la existencia de pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir con el íntegro del requerimiento, lo cual incluyó las otras penalidades.

En ese sentido, considerando el análisis de los párrafos precedentes y dado que la pretensión del recurrente está orientada a que se suprima la penalidad N° 10, y en la medida que, la Entidad mediante su informe ha ratificado dicha penalidad, señalando las razones que sustentan su decisión; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **NO ACOGER** el presente extremo del cuestionamiento.

c) Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 192:

Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 192, se solicitó que se suprima la penalidad N° 38, pues con su aplicación se estaría sancionando dos veces al contratista por la comisión de una misma infracción, lo cual estaría vulnerando el Principio del Debido Procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General; ante lo cual, la Entidad decidió no aceptar lo solicitado, señalando que la aplicación de la penalidad garantiza la reposición oportuna de un bien dañado o sustraído luego de un proceso que establece la responsabilidad del contratista.

En ese contexto, y teniendo en cuenta lo cuestionado por el recurrente, respecto a la absolución señalada en los párrafos precedentes, mediante Informe Técnico N° 022-2024-DIRIS-LN/3¹⁸, la Entidad indicó lo siguiente:

“Al respecto se señala en el pliego absolutorio NO SE ACOGE la observación, la aplicación de la penalidad garantiza la reposición oportuna de un bien dañado o sustraído luego de un proceso que establece la responsabilidad del contratista. Se precisa que, la penalidad cuestionada se refiere al atraso de la reposición del bien o bienes una vez establecida su responsabilidad mediante un informe final”.

Asimismo, mediante Informe Técnico N° 023-2024-DIRIS-LN/3¹⁹, la Entidad indicó lo siguiente:

“(…) se precisa que, el requerimiento de la reposición del bien o bienes sustraídos resultan como consecuencia de un procedimiento para la determinación de responsabilidad que, parte desde detectado un hecho hasta la determinación de responsabilidades mediante un informe final con el resultado de las indagaciones y conclusiones, requiriéndose la reposición del bien o bienes sustraídos o sobre los cuales se generó un daño producto de ello”.

¹⁸ Mediante el Expediente N° 2024-0134069, de fecha 3 de octubre de 2024.

¹⁹ Mediante el Expediente N° 2024-0139744, de fecha 15 de octubre de 2024.

Ahora bien, en atención del tenor de lo cuestionado, se aprecia que, mediante el citado informe técnico, la Entidad decidió ratificar la penalidad N° 38, señalando que tal penalidad se aplicará en caso se produzca un retraso en la reposición del bien o bienes, previa determinación de responsabilidades, siendo que dicha penalidad se encuentra orientada a garantizar la reposición oportuna del bien dañado o sustraído; lo cual resulta razonable teniendo en cuenta la finalidad de las otras penalidades N° 10 y N° 22.

Así, se desprende que la Entidad, siendo la responsable de la determinación de su requerimiento y, por ende, la mejor conocedora de sus necesidades, ha decidido ratificar la penalidad N° 38 prevista en el requerimiento, bajo los argumentos expuestos en su informe técnico. Lo cual, afirma en calidad de declaración jurada y está sujeto a rendición de cuentas.

Adicionalmente, cabe indicar que en el numeral 4.2 del “Formato de Resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias”, la Entidad declaró la existencia de pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir con el íntegro del requerimiento, lo cual incluyó las otras penalidades.

En ese sentido, considerando el análisis de los párrafos precedentes y dado que la pretensión del recurrente está orientada a que se suprima la penalidad N° 38, y en la medida que, la Entidad mediante su informe ha ratificado dicha penalidad, señalando las razones que sustentan su decisión; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **NO ACOGER** el presente extremo del cuestionamiento.

d) Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 208:

Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 208, se solicitó que se modifique el procedimiento de aplicación de penalidades, considerando entre otros la posibilidad de que el contratista presente sus descargos, lo cual estaría acorde al Principio del Debido Procedimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo General; ante lo cual, la Entidad decidió no aceptar lo solicitado, ratificando el procedimiento de aplicación de penalidades.

En ese contexto, y teniendo en cuenta lo cuestionado por el recurrente, respecto a la absolución señalada en los párrafos precedentes, mediante Informe Técnico N° 023-2024-DIRIS-LN/3²⁰, la Entidad indicó lo siguiente:

“(…) Respecto al cuestionamiento N°208, referente al procedimiento para la aplicación de la penalidad, el área usuaria ha establecido el procedimiento considerando que el supervisor del servicio no puede estar físicamente en los ciento veintiocho (128) establecimientos al mismo tiempo, y que los incumplimientos que se puedan detectar, pueden ser también informados por las jefaturas médicas o de quien haga sus veces. Resulta imposible verificar in situ una falta o incumplimiento, por la condición geográfica de la jurisdicción, razón por la cual se considera como válida la información formal mediante

²⁰ Mediante el Expediente N° 2024-0139744, de fecha 15 de octubre de 2024.

documento y/o correo electrónico remitidos por el responsable de cada establecimiento”.

Asimismo, mediante Informe Técnico N° 024-2024-DIRIS-LN/3²¹, la Entidad indicó lo siguiente:

“(…) el área usuaria ha establecido el procedimiento considerando que el supervisor del servicio no puede verificar in situ una falta o incumplimiento al mismo tiempo en la totalidad de los establecimientos y que los incumplimientos que se puedan detectar, pueden ser también informados por las jefaturas médicas o de quien haga sus veces, sin embargo, se acoge parcialmente la observación complementando, adecuando y precisando el procedimiento para tal efecto.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD

1. El Supervisor de Seguridad de Servicios Generales estará a cargo de la verificación, el mismo que levantará un acta consignando la fecha, hora y falta cometida, así mismo, se considerará como documento válido para la certificación del incumplimiento, la información remitida a la Entidad por el responsable del establecimiento o de quien se designe en su lugar.

2. Una vez elaborada el acta de incumplimiento, esta deberá ser firmada por quien(es) comenta(n) la falta, de negarse a firmar, se dejará constancia de ello en el acta y esta será validada por el responsable del establecimiento o quien se encuentre a cargo.

NOTA: En caso se reciba comunicación del responsable del establecimiento (quien es el responsable de otorgar la conformidad del servicio) sobre una falta cometida, el acta deberá ser firmada por el supervisor residente del contratista; de negarse a firmar el acta, se dejará constancia de ello considerando como válido el documento. Cabe resaltar que los incumplimientos que no fueron informados oportunamente para la aplicación de las penalidades en el periodo de prestación del servicio se incluirán en el periodo de prestación subsiguiente.

*3. La Unidad Funcional de Servicios Generales y Transporte a través del Supervisor de Seguridad y Vigilancia **comunicará al contratista vía correo electrónico (proporcionado por esta Unidad Funcional a la activación***

²¹ Mediante el Expediente N° 2024-0145772, de fecha 24 de octubre de 2024.

del servicio) el incumplimiento detectado y/o falta cometida.

4. El contratista tendrá un plazo máximo de setenta y dos (72) horas de recibida la comunicación para remitir el o los descargos correspondientes, vía el mismo medio. La omisión de lo indicado dejará sin efecto reclamos posteriores al respecto.

NOTA: Se precisa que quedan exceptuados de este procedimiento las penalidades del 1 al 9 y 35 respectivamente del CUADRO DE OTRAS PENALIDADES, por ser incumplimientos detectados IN SITU, que no requieren de descargo.

5. El o los descargos serán analizados por la Unidad Funcional de Servicios Generales y Transporte en su calidad de área usuaria; a través del Supervisor de Seguridad y Vigilancia, quien determinará la aceptación o denegación del o los descargos remitidos.

6. La Unidad Funcional de Servicios Generales y Transporte a través del Supervisor de Seguridad y Vigilancia emitirá un único informe debidamente sustentado, correspondiente al mes de prestación del servicio, el mismo que se anexará al informe para pago de dicho periodo.

7. En el plazo máximo de diez (10) días calendario de culminado el mes de prestación del servicio, la Entidad comunicará al contratista, a través de la Oficina de Abastecimiento, el resultado del informe remitido por la Unidad Funcional de Servicios Generales y Transporte, en su calidad de área usuaria; respecto a la decisión motivada y fundada en derecho en virtud al principio de debido procedimiento, referente a la aplicación de penalidades según corresponda.

NOTA:

Las penalidades serán descontadas de manera automática del monto del comprobantes pendiente de pago más próximo que corresponda, o del pago final, o de ser necesario; del monto resultante de la garantía de fiel cumplimiento.

Las penalidades serán ejecutadas sin perjuicio de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, la aplicación de otras penalidades, de la resolución del contrato, de la responsabilidad civil y de las acciones legales pertinentes”.

En relación con ello, es oportuno señalar que la normativa de contrataciones ha señalado que las penalidades aplicables al contratista se aplican ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. Ahora bien, cabe señalar que, el contratista cuando considere justificar un retraso para la no aplicación de algún supuesto de ‘otras penalidades’, debe presentar el sustento objetivo que permita demostrar que la demora o el incumplimiento obedece a una situación no atribuible frente a su actuar diligente en la ejecución del contrato y, que además, la Entidad -como garante de los recursos públicos- evalúe dicho aspecto.

De lo expuesto, se aprecia que, el procedimiento de descargo no implicaría generar el desconocimiento de que el supuesto penalizable haya ocurrido, sino que éste ha sucedido, pero no resultaría atribuible al actuar diligente del contratista; dado que, la normativa en compras públicas ha previsto que las penalidades únicamente se aplicarán al contratista ante el **incumplimiento injustificado** de sus obligaciones contractuales.

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, se aprecia que, mediante el citado informe técnico, la Entidad ha señalado lo siguiente:

- Que, no resulta posible considerar la condición de que el “*Supervisor del servicio*” levante un acta “*in situ*” en cada establecimiento en el que se produzca algún hecho, pues aquél no puede estar físicamente en los ciento veintiocho (128) establecimientos al mismo tiempo, por lo que se considerará como válida la información remitida por el responsable del establecimiento o de quien se designe en su lugar.
- Que, el incumplimiento detectado y/o falta cometida se comunicará al contratista vía correo electrónico, el cual tendrá un plazo máximo de setenta y dos (72) horas de recibida la comunicación para remitir el o los descargos correspondientes. Asimismo, precisa que quedan exceptuados de este procedimiento las penalidades del 1 al 9 y 35, por ser incumplimientos detectados “*in situ*” que no requieren de descargo.
- Que, el o los descargos serán analizados por la Unidad Funcional de Servicios Generales y Transporte en su calidad de área usuaria, y que se emitirá un único informe debidamente sustentado, correspondiente al mes de prestación del servicio, el mismo que se anexará al informe para pago de dicho periodo.
- Que, en un plazo máximo de diez (10) días calendario de culminado el mes de prestación del servicio, la Entidad comunicará al contratista, a través de la Oficina de Abastecimiento, el resultado del informe remitido por la Unidad Funcional de Servicios Generales y Transporte.

Así, se aprecia que la Entidad ha decidido modificar su procedimiento de aplicación de penalidades, considerando, entre otros, la posibilidad de que el contratista presente sus descargos ante los hechos que resulten pasibles de aplicación de penalidad.

Sin embargo, se advierte que la Entidad ha señalado que el contratista no podrá emitir su descargo respecto de determinadas penalidades, lo cual no resulta razonable teniendo en cuenta que dicho descargo no implica generar el desconocimiento de que el supuesto penalizable haya ocurrido, sino que está orientado a que el contratista tenga la oportunidad de brindar un sustento objetivo que demuestre que no hubo incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales.

En ese sentido, considerando el análisis de los párrafos precedentes y dado que la pretensión del recurrente se encuentra orientada a que se modifique el procedimiento de aplicación de penalidades, considerando -entre otros- la oportunidad de presentar descargos respecto de la aplicación de penalidades, y en la medida que la Entidad mediante sus informes, ha decidido modificar el referido procedimiento, considerando un plazo para que el contratista emita sus descargos; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **ACOGER** el presente extremo del cuestionamiento; por lo que, se emitirá la siguiente disposición al respecto:

- **Se adecuará** el acápite 16.2 del numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD

1. El Supervisor de Seguridad de Servicios Generales estará a cargo de la verificación, el mismo que levantará un acta consignando la fecha, hora y falta cometida, así mismo, se considerará como documento válido para la certificación del incumplimiento, la información remitida a la Entidad por el responsable del establecimiento o de quien se designe en su lugar.

2. Una vez elaborada el acta de incumplimiento, esta deberá ser firmada por quien(es) comenta(n) la falta, de negarse a firmar, se dejará constancia de ello en el acta y esta será validada por el responsable del establecimiento o quien se encuentre a cargo.

NOTA: En caso se reciba comunicación del responsable del establecimiento (quien es el responsable de otorgar la conformidad del servicio) sobre una falta cometida, el acta deberá ser firmada por el supervisor residente del contratista; de negarse a firmar el acta, se dejará constancia de ello considerando como válido el documento. Cabe resaltar que los incumplimientos que no fueron informados oportunamente para la aplicación de las penalidades en el periodo de prestación del servicio se incluirán en el periodo de prestación subsiguiente.

3. La Unidad Funcional de Servicios Generales y Transporte a través del Supervisor de Seguridad y Vigilancia comunicará al contratista vía correo electrónico (proporcionado por esta Unidad Funcional a la activación del servicio) el incumplimiento detectado y/o falta cometida.

4. El contratista tendrá un plazo máximo de setenta y dos (72) horas de recibida la comunicación para remitir el o los descargos correspondientes, vía el mismo medio. La omisión de lo indicado dejará sin efecto reclamos posteriores al respecto.

5. El o los descargos serán analizados por la Unidad Funcional de Servicios Generales y Transporte en su calidad de área usuaria; a través del Supervisor de Seguridad y Vigilancia, quien determinará la aceptación o denegación del o los descargos remitidos.

6. La Unidad Funcional de Servicios Generales y Transporte a través del Supervisor de Seguridad y Vigilancia emitirá un único informe debidamente sustentado, correspondiente al mes de prestación del servicio, el mismo que se anexará al informe para pago de dicho periodo.

7. En el plazo máximo de diez (10) días calendario de culminado el mes de prestación del servicio, la Entidad comunicará al contratista, a través de la Oficina de Abastecimiento, el resultado del informe remitido por la Unidad Funcional de Servicios Generales y Transporte, en su calidad de área usuaria; respecto a la decisión motivada y fundada en derecho en virtud al principio de debido procedimiento, referente a la aplicación de penalidades según corresponda.

NOTA:

Las penalidades serán descontadas de manera automática del monto del comprobantes pendiente de pago más próximo que corresponda, o del pago final, o de ser necesario; del monto resultante de la garantía de fiel cumplimiento.

Las penalidades serán ejecutadas sin perjuicio de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, la aplicación de otras penalidades, de la resolución del contrato, de la responsabilidad civil y de las acciones legales pertinentes”.

~~El Supervisor de Seguridad de Servicios Generales estará a cargo de la verificación, el mismo que levantará un acta consignando la fecha, hora y falta cometida, así mismo, se considerará como documento válido para la certificación del incumplimiento, la información remitida a la Entidad por el responsable del establecimiento o de quien se designe en su lugar.~~

~~Una vez elaborada el acta de incumplimiento, esta deberá ser firmada por quien(es) comenta(n) la falta, de negarse a firmar, se dejará constancia de ello en el acta y esta será validada por el responsable del establecimiento o quien se encuentre a cargo.~~

~~Para el caso de cuando se reciba comunicación del responsable del establecimiento sobre una falta cometida, el acta deberá ser firmada por el supervisor residente del contratista; de negarse a firmar el acta, se dejará constancia de ellos considerando como válido el documento.~~

~~Las penalidades serán descontadas de manera automática del monto del comprobante pendiente de pago más próximo que corresponda, o del pago final, o de ser necesario; del monto resultante de la garantía de fiel cumplimiento.~~

~~Las penalidades serán ejecutadas sin perjuicio de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, la aplicación de otras penalidades, de la resolución del contrato, de la responsabilidad civil y de las acciones legales pertinentes.~~

- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** todo extremo de las Bases y/o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y **el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos**, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 10

Respecto al “Curso de Formación Básica y/o perfeccionamiento”

El participante **OPTIMUS SECURITY S.A.C.** cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 114, alegando que la Entidad exige la acreditación de la

formación básica y perfeccionamiento de los agentes de vigilancia, a pesar de que tales cursos se pueden entender como acreditados mediante la presentación del Carnet de SUCAMEC, pues resulta un requisito para la emisión de dicho carnet, con lo cual se está vulnerando el Principio de Libre Concurrencia. Por lo tanto, **la pretensión del recurrente está orientada a solicitar que el curso de formación básica y perfeccionamiento del personal se acredite mediante la presentación del Carnet de SUCAMEC.**

Pronunciamiento

Es así que, mediante la consulta y/u observación N° 114, se solicitó que se deje sin efecto la condición de acreditar **el curso de formación básica y perfeccionamiento del personal de vigilancia**, al tenerse por sustentado con la presentación de los carnet SUCAMEC; ante lo cual, la Entidad precisó que el contratista deberá acreditar la formación de los agentes, conforme a lo requerido en el TDR, toda vez que el área usuaria lo considera importante para poder acreditar la idoneidad del personal respecto del servicio.

En ese contexto, y teniendo en cuenta lo cuestionado por el recurrente, respecto a la absolución señalada en los párrafos precedentes, mediante Informe Técnico N° 023-2024-DIRIS-LN/3²², la Entidad indicó lo siguiente:

“Respecto al cuestionamiento N°114, de acuerdo al artículo N°57 del Reglamento del Decreto Legislativo N°213, que regula las actividades de vigilancia privada, se establece los requisitos mínimos para el personal de seguridad privada, entre ellos se exige que los agentes cuenten con curso de Formación básica y/o perfeccionamiento vigente; en cumplimiento a ello los agentes de seguridad podrían contar con Carnet SUCAMEC.

*De lo expuesto, se precisa que al acreditarse el Carnet Sucamec de los agentes de seguridad, estos ya cuentan con curso de Formación Básica y/o perfeccionamiento vigente, por lo que **se precisa que al contar con carnet SUCAMEC no es necesario requerir el curso de Formación Básica y/o perfeccionamiento**”.*

Al respecto, cabe señalar que, el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, establecen que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento (los términos de referencia en caso de servicios), debiendo éstos contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación.

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, la Entidad, siendo la responsable de la determinación de su requerimiento y, por ende, la mejor conocedora de sus necesidades, mediante el citado informe técnico, aclaró que no requerirá la

²² Mediante el Expediente N° 2024-0139744, de fecha 15 de octubre de 2024.

acreditación del Curso de Formación Básica y/o perfeccionamiento, considerando que dichos cursos son requisitos para la emisión de Carnet SUCAMEC, el cual a su vez será presentado para el perfeccionamiento del contrato.

En ese sentido, considerando el análisis de los párrafos precedentes y dado que la pretensión del recurrente es que el curso de Formación Básica y/o perfeccionamiento se entienda acreditado mediante la presentación del Carnet de SUCAMEC, y en la medida que, mediante informe técnico, la Entidad admitió lo solicitado por el recurrente; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **ACOGER** el presente cuestionamiento; por lo que, se emitirá la siguiente disposición al respecto:

- **Se deberá tener en cuenta**²³ lo señalado por la Entidad en el Informe Técnico N° 023-2024-DIRIS-LN/3, respecto a que “*se precisa que al contar con carnet SUCAMEC no es necesario requerir el curso de Formación Básica y/o perfeccionamiento*”.

Cabe señalar que **se dejará sin efecto** todo extremo de las Bases y/o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y **el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos**, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 11

Respecto a la “Habilitación del postor”

El participante **OPTIMUS SECURITY S.A.C.** cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 200, alegando que si bien la Entidad ha señalado en el pliego absolutorio que no corresponde solicitar autorización en el servicio de vigilancia privada bajo la modalidad de prestación de servicio de tecnología de la seguridad, no obstante, en las Bases Integradas se exige que el contratista acredite dicha autorización, lo cual genera confusión entre los participantes y vulnera el Principio de Transparencia.

Por lo tanto, la pretensión del recurrente está orientada a **que se suprima la exigencia de acreditar la autorización en servicio de vigilancia privada bajo la modalidad de prestación del servicio de tecnología de la seguridad.**

Pronunciamiento

De la revisión del acápite 5.5.3 del numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

²³ Cabe señalar que no corresponde que esta disposición se implemente en las Bases Integradas Definitivas, sin embargo, deberá considerarse en la etapa correspondiente.

5.5.3. SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

(...)

NOTA:

En los establecimientos que cuenten con cámaras CCTV, el contratista deberá darles el respectivo mantenimiento, con la finalidad de ponerlas operativas acorde con la tecnología actual, y en caso de requerirse, realizar el cambio correspondiente, que incluye la totalidad de los componentes e insumos necesarios para tal efecto. El contratista deberá coordinar una visita conjunta con el personal técnico que designe la Unidad Funcional de Servicios Generales y Transportes para realizar la evaluación correspondiente, para lo cual el contratista deberá acreditar contar con autorización de seguridad tecnológicas emitida por la SUCAMEC para la oferta.

Es así que, mediante la consulta y/u observación N° 200, se solicitó que, en cumplimiento por lo dispuesto por SUCAMEC, se incluya en los requisitos de calificación a la autorización en Servicio de vigilancia privada bajo la modalidad de prestación de servicios de tecnología de la seguridad; ante lo cual, la Entidad no acogió lo solicitado, señalando que no corresponde a la finalidad de la contratación.

En ese contexto, y teniendo en cuenta lo cuestionado por el recurrente, respecto a la absolución señalada en los párrafos precedentes, mediante Informe Técnico N° 022-2024-DIRIS-LN/3²⁴, la Entidad indicó lo siguiente:

“Al respecto se señala en el pliego absolutorio NO SE ACOGE la observación, no se solicita lo indicado porque no corresponde a la finalidad de la contratación. En ese contexto SE SUPRIME de las Bases Integradas el requerimiento de acreditar autorización de seguridad tecnológica emitida por la SUCAMEC para la presentación de la oferta”.

En relación con lo anterior, mediante Informe Técnico N° 023-2024-DIRIS-LN/3²⁵, la Entidad indicó lo siguiente:

²⁴ Mediante el Expediente N° 2024-0134069, de fecha 3 de octubre de 2024.

²⁵ Mediante el Expediente N° 2024-0139744, de fecha 15 de octubre de 2024.

“Se aclara que, el servicio solicitado requiere actividades de custodia de bienes y seguridad de servidores y usuarios de los servicios; mas no que estas actividades se realicen a través del monitoreo de señales. La instalación y/o mantenimiento de cámaras de video vigilancia se ha planteado para los establecimientos que requieren el incremento de las cámaras del sistema de video vigilancia ya instaladas en cada de los establecimientos indicados en el anexo N°02 del numeral 5.5.3.1 del capítulo III de la sección específica de las Bases de la convocatoria. Cabe resaltar que en los establecimientos que cuenten con un sistema de video vigilancia, el monitoreo es realizado por servidores de cada establecimiento”.

Al respecto, el artículo 34 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1213 “Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada”, señala que: *“El servicio de tecnología de seguridad es prestado por empresas especializadas dedicadas a proporcionar protección y custodia a personas y bienes **a través del monitoreo de señales y de respuesta**, conectados con dispositivos y equipos electrónicos. Estos servicios **pueden comprender la instalación, desinstalación y/o mantenimiento de equipos y dispositivos**”.*

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, la Entidad, siendo la responsable de la determinación de su requerimiento y, por ende, la mejor conocedora de sus necesidades, mediante el citado informe técnico, aclaró que en la presente contratación no se requerirá la presentación de la autorización en servicio de vigilancia privada bajo la modalidad de prestación de servicio de tecnología de la seguridad, considerando que el servicio no requiere el monitoreo de señales, pues solo se requiere actividades de custodia de bienes y seguridad de servidores y usuarios de los servicios. Así también, refirió que en los establecimientos que cuenten con un sistema de video vigilancia, el monitoreo es realizado por servidores de cada establecimiento.

En ese sentido, considerando el análisis de los párrafos precedentes y dado que la pretensión del recurrente está orientada a que se suprima la autorización para brindar el servicio de vigilancia privada bajo la modalidad de prestación de servicio de tecnología de la seguridad del requerimiento, y en la medida que, la Entidad mediante su informe aclaró que no corresponde requerir tal autorización para el presente servicio; este Organismo Técnico Especializado ha decidido **ACOGER** el presente cuestionamiento; por lo que, se emitirá la siguiente disposición al respecto:

- **Se adecuará** el acápite 5.5.3 y el acápite 10 del numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente

5.5.3. SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

(...)

NOTA:

En los establecimientos que cuenten con cámaras CCTV, el contratista deberá darles el respectivo mantenimiento, con la finalidad de ponerlas operativas acorde con la tecnología actual, y en caso de requerirse, realizar el cambio correspondiente, que incluye la totalidad de los componentes e insumos necesarios para tal efecto. El contratista deberá coordinar una visita conjunta con el personal técnico que designe la Unidad Funcional de Servicios Generales y Transportes para realizar la evaluación correspondiente, ~~para lo cual el contratista deberá acreditar contar con autorización de seguridad tecnológicas emitida por la SUCAMEC para la oferta.~~

10. De las labores de supervisión

(...)

c) OPERADOR DE CENTRO DE CONTROL:

a) El servicio contará con un Operador de Centro de Control quien será el responsable de establecer comunicación con el personal de vigilancia en los puestos asignados. ~~Así mismo, será el responsable de operar las cámaras de video vigilancia instaladas en la Sede Administrativa.~~

- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** todo extremo de las Bases y/o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y **el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos**, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO

Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, por norma, versa sobre los supuestos cuestionamientos derivados de la absolución de consultas y/u observaciones, y no representa la convalidación de ningún extremo de las bases, este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio, según el siguiente detalle:

3.1 Respecto de la oportunidad para la presentación de documentos

De la revisión del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente:

7. OTRAS CONDICIONES DEL SERVICIO:

(...)

d) El contratista deberá acreditar la propiedad del armamento que pondrá a disposición para la prestación del servicio, mediante tarjeta de propiedad, factura y/o contrato de compraventa, el mismo que tendrá que estar en óptimas condiciones de operatividad, el cual será acreditado para la firma de contrato.

e) El contratista deberá contar con un personal armero debidamente capacitado por las fuerzas armadas y/o policiales, para la manipulación y mantenimiento del armamento utilizado para el servicio. Se acreditará la capacitación del armero para la firma de contrato, mediante copia de certificados y/o constancias.

(...)

10. De las labores de supervisión

c) OPERADOR DE CENTRO DE CONTROL:

(...)

b) Tener como mínimo un (01) año de experiencia en puestos similares (operador de centro de control), se acreditará con copias simples de certificados de trabajo.

c) Tener conocimientos (estudios) como operador en centro de control (se acreditará con copia simple de certificado o constancia de estudio)

(...)

12. PERFIL DEL PERSONAL SOLICITADO

El personal de seguridad que preste servicios en la DIRIS Lima Norte, podrá ser personal civil, o personal en retiro de las Fuerzas Armadas y/o Policiales.

12.1.SUPERVISOR DE SEGURIDAD (Personal Clave)

(...)

e) Deberá acreditar no tener enfermedades preexistentes o impedimentos físicos que limiten desarrollar labores de supervisión en vigilancia y seguridad, con diligencia y suficiencia, se acreditará con certificado médico y psicológico no mayor a tres meses de antigüedad a la firma del contrato.

(...)

12.2. AGENTE DE VIGILANCIA

(...)

d) Deberá acreditar no tener enfermedades preexistentes o impedimentos físicos que limiten desarrollar labores de supervisión en vigilancia y seguridad, con diligencia y suficiencia, para la firma de contrato se acreditará con certificado médico y psicológico no mayor a tres meses de antigüedad.

e) Secundaria completa, se acreditará con Declaración Jurada, para el perfeccionamiento del contrato con COPIA SIMPLE del Certificado de Estudios y/o Copia de la Ficha de RENIEC - C4 y/o copia de Declaración Jurada suscrita por el Agente de Seguridad.

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad requiere la presentación de diversos documentos para la firma del contrato; sin embargo, se advierte que los citados documentos no se han incluido en el numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el contrato” del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas.

Asimismo, se aprecia que se requiere la acreditación de la experiencia y conocimientos del Operador del Centro de Control, sin embargo, no se ha indicado la oportunidad en la que se realizará tal acreditación.

Por tanto, considerando lo señalado precedentemente, y a fin de no generar confusión entre los participantes, se emitirá la siguiente disposición al respecto:

- **Se incluirá** en el numeral 2.3 numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, los siguientes documentos:

s) Tarjeta de propiedad, factura y/o contrato de compraventa que acredite la propiedad del armamento que pondrá a disposición para la prestación del servicio.

t) Certificados y/o constancias que acrediten que el Armero se encuentra debidamente capacitado por personas naturales o jurídicas que cuenten

con todas las competencias legales para brindar la capacitación, para la manipulación y mantenimiento del armamento utilizado para el servicio.

u) Certificado médico y psicológico no mayor a tres meses de antigüedad que acredite que el Supervisor de seguridad no tiene enfermedades preexistentes o impedimentos físicos que limiten desarrollar labores de supervisión en vigilancia y seguridad, con diligencia y suficiencia.

v) Certificado médico y psicológico no mayor a tres meses de antigüedad que acredite que el Agente de vigilancia no tiene enfermedades preexistentes o impedimentos físicos que limiten desarrollar labores de supervisión en vigilancia y seguridad, con diligencia y suficiencia.

w) Declaración Jurada, con COPIA SIMPLE del Certificado de Estudios y/o Copia de la Ficha de RENIEC - C4 y/o copia de Declaración Jurada suscrita por el Agente de Seguridad, que acredite secundaria completa.

x) Copias simples de certificados de trabajo que acrediten la experiencia del Operador de Centro de Control

y) Copia simple de certificado o constancia de estudio que acredite los conocimientos requeridos al Operador de Centro de Control

- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** todo extremo de las Bases y/o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

3.2 Respecto de la acreditación del vehículo

De la revisión del acápite 10 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente:

10. DE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN

a) SUPERVISIÓN EXTERNA:

(...)

4. El contratista deberá tener a disposición de la DIRIS Lima Norte, un (01)

vehículo con una antigüedad no mayor a cuatro (04) años, que se encuentre en perfectas condiciones operativas, para efectuar las rondas de supervisión y para la resolución inmediata ante cualquier contingencia, la misma que deberá acreditar para la suscripción de contrato, con la Tarjeta de Propiedad a nombre del postor, o con un contrato de alquiler de ser el caso; así mismo, no deberá contar con sanciones ni infracciones pendientes de pago.

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad señala que requiere un vehículo para la prestación del servicio, el cual deberá ser acreditado para la suscripción del contrato; no obstante, se advierte que con ocasión de la consulta y/u observación N° 281 la Entidad señaló que dicho vehículo es un equipamiento estratégico que deberá acreditarse para la calificación de ofertas.

Por lo tanto, a fin de evitar confusión entre los potenciales postores, se emitirá la siguiente disposición al respecto:

- **Se adecuará** el numeral acápite 10 del 3.1 numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

10. DE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN

a) SUPERVISIÓN EXTERNA:

(...)

4. El contratista deberá tener a disposición de la DIRIS Lima Norte, un (01) vehículo con una antigüedad no mayor a cuatro (04) años, que se encuentre en perfectas condiciones operativas, para efectuar las rondas de supervisión y para la resolución inmediata ante cualquier contingencia, ~~la misma que deberá acreditar para la suscripción de contrato, con la Tarjeta de Propiedad a nombre del postor, o con un contrato de alquiler de ser el caso; así mismo, no deberá contar con sanciones ni infracciones pendientes de pago.~~

- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** todo extremo de las Bases y/o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

3.3 De las Bases Integradas

De la revisión del acápite 5.5.3 del numeral 3.1 Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

El contratista realizará la instalación completa de las cámaras de video vigilancia, de acuerdo al CUADRO ANEXO N° 2

<i>ESTABLECIMIENTO/SEDE</i>	<i>CÁMARAS</i>	<i>DVR</i>	
		<i>CAPACIDAD</i>	<i>CANALES</i>
<i>SEDE ADMINISTRATIVA</i>	8	8	32
<i>CETPRO EL BUEN PASTOR</i>	4	1	4
<i>LOCAL DE INVERSIONES</i>	4	1	4
<i>LOCAL DE SECRETARÍA TÉCNICA</i>	4	1	4
<i>C.M.I RIMAC</i>	8	4	16
<i>C.M.I MÉXICO</i>	16	4	16
<i>C.M.I JUAN PABLO II</i>	16	4	16
<i>C.M.I TAHUANTINSUYO BAJO</i>	16	4	16
<i>C.M.I SANTA LUZMILA II</i>	16	4	16
<i>C.M.I EL PROGRESO</i>	8	2	16
<i>C.M.I SANTA ROSA</i>	8	2	8
<i>C.M.I LOS SUREÑOS</i>	8	2	8

(..)

5.5.3.2 CARACTERISTICAS MINIMAS TECNICAS DE EQUIPOS A INSTALAR:

(...)

DVR GRABADOR

- *DVR grabador con capacidad de (según cuadro anexo N° 02)*

Ahora bien, de la revisión del acápite 5.5.3 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente:

5.5.3.1 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA

El contratista realizará la instalación completa de las cámaras de video vigilancia, de acuerdo al CUADRO ANEXO N°02

ESTABLECIMIENTO/SE DE	PROYECCI ÓN	INSTALA DAS	REQUERID AS
<i>SEDE ADMINISTRATIVA</i>	<i>24</i>	<i>16</i>	<i>8</i>
<i>CETPRO EL BUEN PASTOR</i>	<i>8</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<i>LOCAL DE INVERSIONES</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>4</i>
<i>LOCAL DE SECRETARÍA TÉCNICA</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>
<i>ALMACÉN DE MEDICAMENTOS</i>	<i>12</i>	<i>10</i>	<i>2</i>
<i>CENTRO DE ATENCIÓN NUTRICIONAL</i>	<i>8</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<i>C.M.I PIEDRA LIZA</i>	<i>16</i>	<i>13</i>	<i>3</i>
<i>C.M.I RIMAC</i>	<i>16</i>	<i>5</i>	<i>11</i>
<i>C.M.I MÉXICO</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>16</i>
<i>C.M.I JUAN PABLO II</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>16</i>
<i>C.M.I TAHUANTINSUYO BAJO</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>16</i>

<i>C.M.I SANTA LUZMILA II</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>16</i>
<i>C.M.I LAURA RODRIGUEZ DULANTO</i>	<i>16</i>	<i>6</i>	<i>10</i>
<i>C.M.I EL PROGRESO</i>	<i>16</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
<i>C.M.I SANTA ROSA</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>12</i>
<i>C.M.I ENRIQUE MARTIN ALTUNA</i>	<i>12</i>	<i>8</i>	<i>4</i>
<i>C.M.I LOS SUREÑOS</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>12</i>
<i>C.M.I ANCÓN</i>	<i>12</i>	<i>7</i>	<i>5</i>

(...)

5.5.3.2 CARACTERISTICAS MINIMAS TECNICAS DE EQUIPOS A INSTALAR:

(...)

DVR GRABADOR

- *DVR grabador con capacidad de **4TB***

De lo expuesto, se advierte que, con ocasión de la integración de Bases, la Entidad ha realizado modificaciones en el numeral 5.5.3.1 del Capítulo III, incluyendo sedes adicionales para la instalación de cámaras, entre otros; sin embargo, cabe señalar que dichas modificaciones no se habrían precisado en virtud del pliego absolutorio, siendo modificaciones que exceden lo observado o consultado por los participantes.

En relación con lo anterior, mediante Informe Técnico N° 023-2024-DIRIS-LN/3²⁶, la Entidad indicó lo siguiente:

“De la revision del numeral 5.5.3.1 del Capitulo III de la Seccion Especifica de las Bases de la convocatoria se aprecia un a modificación del anexo N° 02, por

²⁶ Mediante el Expediente N° 2024-0139744, de fecha 15 de octubre de 2024.

error de transcripción, incluyendo en su lugar un anexo modificado respecto a las Bases, por lo que se aclara que se mantiene el anexo que forma parte de las Bases de la convocatoria”.

Por lo tanto, considerando lo señalado por la Entidad en el citado informe técnico, y a fin de evitar confusión entre los potenciales postores, se emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- **Se adecuará** el numeral acápite 5.5.3 del 3.1 numeral 3.1 del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

5.5.3.1 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA

El contratista realizará la instalación completa de las cámaras de video vigilancia, de acuerdo al CUADRO ANEXO N°02

<i>ESTABLECIMIENTO/SEDE</i>	<i>CÁMARAS</i>	<i>DVR</i>	
		<i>CAPACIDAD</i>	<i>CANALES</i>
<i>SEDE ADMINISTRATIVA</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>32</i>
<i>CETPRO EL BUEN PASTOR</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>4</i>
<i>LOCAL DE INVERSIONES</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>4</i>
<i>LOCAL DE SECRETARÍA TÉCNICA</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>4</i>
<i>C.M.I RIMAC</i>	<i>8</i>	<i>4</i>	<i>16</i>
<i>C.M.I MÉXICO</i>	<i>16</i>	<i>4</i>	<i>16</i>
<i>C.M.I JUAN PABLO II</i>	<i>16</i>	<i>4</i>	<i>16</i>
<i>C.M.I TAHUANTINSUYO BAJO</i>	<i>16</i>	<i>4</i>	<i>16</i>
<i>C.M.I SANTA LUZMILA II</i>	<i>16</i>	<i>4</i>	<i>16</i>

<i>C.M.I EL PROGRESO</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	<i>16</i>
<i>C.M.I SANTA ROSA</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	<i>8</i>
<i>C.M.I LOS SUREÑOS</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	<i>8</i>
<i>ESTABLECIMIENTO/SEDE</i>	<i>PROYECCIÓN</i>	<i>INSTALADAS</i>	<i>REQUERIDAS</i>
<i>SEDE ADMINISTRATIVA</i>	<i>24</i>	<i>16</i>	<i>8</i>
<i>CETPRO EL BUEN PASTOR</i>	<i>8</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<i>LOCAL DE INVERSIONES</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>4</i>
<i>LOCAL DE SECRETARÍA TÉCNICA</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>
<i>ALMACÉN DE MEDICAMENTOS</i>	<i>12</i>	<i>10</i>	<i>2</i>
<i>CENTRO DE ATENCIÓN NUTRICIONAL</i>	<i>8</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<i>C.M.I PIEDRA LIZA</i>	<i>16</i>	<i>13</i>	<i>3</i>
<i>C.M.I RIMAC</i>	<i>16</i>	<i>5</i>	<i>11</i>
<i>C.M.I MÉXICO</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>16</i>
<i>C.M.I JUAN PABLO II</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>16</i>
<i>C.M.I TAHUANTINSUYO BAJO</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>16</i>
<i>C.M.I SANTA LUZMILA II</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>16</i>
<i>C.M.I LAURA RODRIGUEZ DULANTO</i>	<i>16</i>	<i>6</i>	<i>10</i>
<i>C.M.I EL PROGRESO</i>	<i>16</i>	<i>8</i>	<i>8</i>

C.M.I SANTA ROSA	12	0	12	
C.M.I ENRIQUE MARTIN ALTUNA	12	8	4	
C.M.I LOS SUREÑOS	12	0	12	
C.M.I ANCÓN	12	7	5	
<p>(...)</p> <p>5.5.3.2 CARACTERISTICAS MINIMAS TECNICAS DE EQUIPOS A INSTALAR:</p> <p>(...)</p> <p>DVR GRABADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> DVR grabador con capacidad de (según cuadro anexo N° 02) <p>4TB</p>				

- Corresponde que el Titular de la Entidad **imparta directrices** correspondientes a fin que el comité de selección realice la integración de bases, de tal manera que las modificaciones efectuadas a las Bases se realicen en virtud de la absolución de consultas y/u observaciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 72 del Reglamento.
- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** todo extremo de las Bases y/o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

3.4 Penalidades

De la revisión acápite 16.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, lo siguiente:

16.2 OTRAS PENALIDADES

Al amparo del artículo 223° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se

establece la aplicación de otras penalidades.

<i>Item</i>	<i>Incumplimiento</i>	<i>Penalidad</i>	<i>Procedimiento de Verificación</i>
6	<i>Prestar el servicio con un uniforme en mal estado, deteriorado, sucio o prenda que no corresponda al uniforme de vigilancia.</i>	(...)	(...)
21	<i>No reportar oportunamente incidencias relevantes que requieran la intervención del personal de la DIRIS LN, a la Coordinación de Servicios Generales</i>	(...)	(...)
23	<i>Fomentar escándalos, peleas u otros, maltrato al usuario, falta de respeto a funcionarios y personal de la institución.</i>	(...)	(...)
24	<i>Prestar el servicio en estado étlico o efectos de estupefacientes.</i>	(...)	(...)
40	<i>Participar en conflictos internos de cualquier índole.</i>	(...)	(...)

Al respecto, se aprecia que no quedaría claro el sentido y alcance de los siguientes términos de las citadas penalidades:

- **Penalidad N° 6:** “uniforme en mal estado”.
- **Penalidad N° 21:** “no reportar oportunamente incidencias relevantes”.
- **Penalidad N° 23:** “fomentar escándalos, peleas u otros”
- **Penalidad N° 24:** “estado etlico o efectos de estupefacientes”.
- **Penalidad N° 40:** “participar en conflictos internos de cualquier índole”.

En ese contexto, y teniendo en cuenta lo cuestionado por el recurrente, respecto a la absolución señalada en los párrafos precedentes, mediante Informe Técnico N° 023-2024-DIRIS-LN/3²⁷, la Entidad indicó lo siguiente:

Al respecto se aclara y precisa las siguientes penalidades:

-Penalidad N° 6: “Uniforme en mal estado”, se aclara y precisa que está

²⁷ Mediante el Expediente N° 2024-0139744, de fecha 15 de octubre de 2024.

referido a la presentación del personal del contratista, específicamente si el uniforme se encuentra roto, descosido, desteñido con evidentes signos de decoloración.

-Penalidad N° 21: "No reportar oportunamente incidencias relevantes", se aclara y precisa que las incidencias relevantes son las que alteran el desarrollo normal del servicio y que ameritan el conocimiento de la supervisión del contratista y del supervisor de la Unidad Funcional de Servicios Generales y Transporte, para la toma de acciones inmediatas que ameriten la intervención y respuesta rápida, tales como intentos de robo, robos, agresiones al personal, atentados contra la infraestructura del establecimiento, y otras situaciones que alteren el desarrollo normal de las actividades.

-Penalidad N° 23: "Fomentar escándalos peleas u otros", se aclara y precisa que está referida situaciones en las cuales participe el personal de vigilancia ya sea contra el personal del establecimiento, el público usuario y/o en situaciones de índole personal, que alteren el normal desarrollo de las actividades del establecimiento, tales como grescas, faltas de respeto tanto al público usuario como al personal del establecimiento. Sobre el entendido que el personal de vigilancia de acuerdo a las funciones asignadas tiene la capacidad para mantener el orden, disuadir e intervenir en situaciones que lo ameriten, en base a los protocolos establecidos.

-Penalidad N° 24: "estado etílico o efectos de estupefacientes", al respecto se precisa que, al apreciar indicios que el personal de vigilancia se encuentre bajo un evidente estado etílico y/o de estupefacientes se le comunicará inmediatamente al supervisor residente del contratista, para que el agente de vigilancia pase por los exámenes correspondientes bajo su responsabilidad. En tanto será reemplazado por un agente reten a su cargo.

-Penalidad N° 40: "participar en conflictos internos de cualquier índole", al respecto se aclara y precisa que el agente de vigilancia no podrá formar parte de agremiaciones sindicales ni participar en disputas internas de índole laboral que son de exclusividad del personal que tiene un vínculo laboral con la Entidad. Así mismo, no podrá formar parte en cualquier disputa interna entre el personal de la Entidad.

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad, mediante su informe técnico, ha brindado mayores alcances respecto de las penalidades N° 6, N° 21, N° 23, N° 24 y N° 40; sin embargo, es preciso señalar que, respecto de la penalidad N° 24, no se ha establecido un mecanismo objetivo por el cual se pueda determinar el estado etílico o bajo los efectos de estupefacientes, siendo que la Entidad aplicará tal penalidad únicamente al apreciar "indicios" sobre ello.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, se emitirá la siguiente disposición al respecto:

- **Se adecuará** el acápite 16.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

16.2 OTRAS PENALIDADES

Al amparo del artículo 223° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece la aplicación de otras penalidades.

<i>Item</i>	<i>Incumplimiento</i>	<i>Penalidad</i>	<i>Procedimiento de Verificación</i>
6	<i>Prestar el servicio con un uniforme en mal estado (uniforme se encuentra roto, descosido, desteñido con evidentes signos de decoloración), deteriorado, sucio o prenda que no corresponda al uniforme de vigilancia.</i>	(...)	(...)
21	<i>No reportar oportunamente incidencias relevantes que requieran la intervención del personal de la DIRIS LN, a la Coordinación de Servicios Generales.</i> <i>Se aclara y precisa que las incidencias relevantes son las que alteran el desarrollo normal del servicio y que ameritan el conocimiento de la supervisión del contratista y del supervisor de la Unidad Funcional de Servicios Generales y Transporte, para la toma de acciones inmediatas que ameriten la intervención y respuesta rápida, tales como intentos de robo, robos, agresiones al personal, atentados contra la infraestructura del establecimiento, y otras situaciones que alteren el desarrollo normal de las actividades.</i>	(...)	(...)
23	<i>Fomentar escándalos, peleas u otros, maltrato al usuario, falta de respeto a funcionarios y personal de la institución.</i>	(...)	(...)

	<i>Está referida situaciones en las cuales participe el personal de vigilancia ya sea contra el personal del establecimiento, el público usuario y/o en situaciones de índole personal, que alteren el normal desarrollo de las actividades del establecimiento, tales como grescas, faltas de respeto tanto al público usuario como al personal del establecimiento. Sobre el entendido que el personal de vigilancia de acuerdo a las funciones asignadas tiene la capacidad para mantener el orden, disuadir e intervenir en situaciones que lo ameriten, en base a los protocolos establecidos.</i>			
24	<i>Prestar el servicio en estado ético o efectos de estupefacientes.</i>	(...)	(...)	
40	<i>Participar en conflictos internos de cualquier índole.</i> <i>El agente de vigilancia no podrá formar parte de agremiaciones sindicales ni participar en disputas internas de índole laboral que son de exclusividad del personal que tiene un vínculo laboral con la Entidad. Así mismo, no podrá formar parte en cualquier disputa interna entre el personal de la Entidad.</i>	(...)	(...)	

- Cabe señalar que **se dejará sin efecto** todo extremo de las Bases y/o Pliego absolutorio que se oponga a lo dispuesto precedentemente.

3.5. Respetto de las Bases Integradas

Cabe señalar que el Principio de Transparencia, consignado en el literal c) del artículo 2 de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar información clara y coherente con el fin de que esta sea comprendida por todos los potenciales proveedores; es así que, en la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD se dispone que al absolver las consultas y/u observaciones, el comité de selección deberá detallar de manera clara y motivada la respuesta a la solicitud formulada por el participante y el análisis del mismo.

En tal sentido, el Principio de Transparencia contempla el derecho a la información en la compra pública, el cual tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la Entidad convocante; para lo cual, se exige que todas las condiciones del procedimiento estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en las Bases o en las respuestas brindadas en el pliego absolutorio, con el fin de que, por una parte, todos los postores razonablemente

informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, por otra parte, la Entidad convocante pueda comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por los postores responden a los criterios aplicables al contrato.

Ahora bien, es conveniente señalar que, en las Bases Integradas publicadas en el SEACE, el 20 de septiembre de 2024, no se han implementado las modificaciones y/o precisiones realizadas en virtud de la absolución de las consultas y/u observaciones N° 29, N° 37, N° 51, N° 109 y N° 130.

En razón de ello, cabe indicar que si bien no existe un método exacto para integrar las Bases; cierto es que, dicha integración deberá permitir que los potenciales postores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender el alcance exacto de las mismas, conforme al Principio de Transparencia que regula toda contratación Estatal.

En ese sentido, considerando que la Bases Integradas publicadas en el SEACE, el 20 de septiembre de 2024, podrían conllevar la confusión de los potenciales postores, se emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- **Se implementará** en las Bases Integradas, lo precisado por la Entidad en la absolución de las consultas y/u observaciones N° 29, N° 37, N° 51, N° 109 y N° 130, a fin de que la información obrante en esta pueda ser comprendida por los potenciales postores.
- **Corresponderá al Titular de la Entidad** implementar las directrices pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de selección cumpla con Integrar las Bases de forma clara y precisa, conforme a lo dispuesto en el Principio de Transparencia que regula toda contratación Estatal.

4. CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto:

- 4.1** Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento.
- 4.2** Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participan en el procedimiento de selección.

Adicionalmente, cabe señalar que, las disposiciones vertidas en el pliego absolutorio que generen aclaraciones, modificaciones o precisiones, priman sobre los aspectos relacionados con las Bases integradas, salvo aquellos que fueron materia del presente pronunciamiento.

- 4.3** Una vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de Bases definitivas por el OSCE, corresponderá al comité de selección **modificar** en el cronograma del procedimiento, las fechas del registro de participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, teniendo en cuenta que, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento.
- 4.4** Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.

Jesús María, 31 de octubre de 2024

Código: 6.1, 6.17, 22.1.